LA CONTRIBUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA AL DERECHO INTERNACIONAL *

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. LA APORTACIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL CLÁSICO. A. *El Estado*: 1. *Los elementos del Estado*. 2. *Las competencias del Estado*. B. *Las relaciones entre Estados*: 1. *Las fuentes del Derecho Internacional*. 2. *La reglamentación de las relaciones entre Estados*. III. CONSIDERACIONES FINALES.

I. INTRODUCCIÓN

1. La Corte Internacional de Justicia sucedió en 1946 a la Corte Permanente de Justicia Internacional. Este tribunal, con sede en La Haya, es internacional por su estatuto, ya que es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas y está compuesto de jueces que representan los diversos sistemas jurídicos del mundo. Tiene por misión aplicar el derecho internacional, ya sea para resolver por medio de sus sentencias controversias jurídicas entre los Estados, o para responder por medio de opiniones consultivas a problemas jurídicos planteados por los organismos internacionales.

La Corte ha emitido, en 25 años, 52 decisiones: 31 sentencias y 14 opiniones. Independientemente del juicio político que nos merezca la importancia práctica limitada de este tribunal, por haber contribuido en poco al arreglo de las controversias esenciales de estos últimos años en el mundo, es innegable su importancia, desde un punto de vista teórico—que es el que hemos de resaltar en el curso del presente trabajo— ya que ha contribuido al desenvolvimiento y a la evolución no solamente del derecho internacional en sí, tanto a nivel del Estado como de las organizaciones internacionales, sino también del derecho de la justicia internacional.

* *Nota aclaratoria*: Por la índole misma del presente trabajo, hemos voluntariamente omitido el sistema de notas de pie de página, incorporando al texto las referencias a las sentencias y opiniones consultivas de la Corte, con su fecha respectiva, relativas al tema tratado, pero dando al final del trabajo, la indicación sobre las recopilaciones mismas de la Corte, así como una bibliografía general relativa a la Corte Internacional de Justicia. Todo ello en virtud de dos consideraciones. En primer término, la imposibilidad material de referimos o incluir previamente toda la labor jurisprudencial de poco más de 25 años de actividad de la Corte Internacional. En segundo lugar, el supuesto de que tal necesaria omisión se resuelve por dos medios complementarios, el conocimiento relativo de la materia que hoy tratamos y el recurso a las fuentes de información proporcionadas al final de este estudio.

La bibliografía en multitud de lenguas sobre la Corte Internacional de Justicia es muy amplia, ya sea que trate de aspectos generales o específicos, habiéndose realizado balances de su actividad jurisdiccional en varias ocasiones. Daremos cuenta de ello con una información documental al final del trabajo. Nuestro propósito en esta ocasión está circunscrito a repasar a través de su jurisprudencia relevante su contribución al derecho internacional clásico concretamente en lo que se refiere a los problemas del Estado y de las relaciones entre Estados.

Sin hacer mayores repasos históricos, cabe recordar que la idea de un sistema judicial internacional puede ser muy antiguo, pero su realización no lo es. Si bien fue establecida una Corte Permanente de Arbitraje por las Conferencias de Paz de La Haya, en 1899 y 1907, una Corte Internacional de Justicia quedó sólo en proyecto. Más tarde, la Corte Permanente de Justicia Internacional aparece vinculada con la Liga de las Naciones, ya que su Pacto prevé su creación en el artículo 14. El Estatuto de la Corte Permanente, tratado distinto al Pacto mismo, fue elaborado por un comité de juristas, sometido al Consejo y a la Asamblea de la Liga de Naciones, y abierto a la firma de los Estados el 16 de diciembre de 1920. El Protocolo del 14 de septiembre de 1929 introduce después diversas reformas al funcionamiento de dicho tribunal.

A diferencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, la Corte Internacional de Justicia fue concebida como parte integrante de la organización mundial. Las conversaciones de Dumbarton Oaks deciden su creación como órgano judicial principal de las Naciones Unidas; igualmente un comité de juristas reunido en Washington en abril de 1945 define su estatuto. No se propone resucitar la Corte Permanente, sino crear un nuevo tribunal, sin embargo, se decide a calcar su estatuto del de la Corte Permanente.

La Carta de las Naciones Unidas, adoptada en San Francisco el 26 de junio de 1945, consagra sus artículos 92 al 96 a la Corte Internacional de Justicia. El Estatuto de dicha Corte, adoptado ese mismo día, es "anexado a la Carta de la que forma parte integrante". Esos textos erigen a la Corte en "órgano judicial principal de las Naciones Unidas" (Carta, artículos 7 y 92; Estatuto, preámbulo); consideran a los miembros de las Naciones Unidas como partes *ipso facto* en el Estatuto de la Corte y establecen diversos vínculos. Por lo demás, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia copia el de la Corte Permanente hasta en su numeración, la que es mantenida.

2. La Corte es una jurisdicción internacional permanente. Está formada de quince jueces permanentes y, en caso dado, de jueces nacionales *ad hoc*.

La designación de los jueces tiende a eliminar tanto como es posible las consideraciones demasiado políticas o por lo menos a menguarlas. Para ello se efectúa una consulta ante las agrupaciones judiciales y universitarias vinculadas con el derecho y se realiza la presentación de los can-

didatos por los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje; por último, la elección la llevan a cabo la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Seguridad, que votan por separado y por mayoría absoluta; en caso de desacuerdo, una comisión conjunta efectúa la mediación.

Esta designación debe garantizar la representación de las grandes formas de civilización y los principales sistemas jurídicos del mundo. Garantiza, de hecho, además, un sitio a cada gran potencia, pero sólo uno, pues "no podía haber dos que sean nacionales del mismo Estado" (Estatuto, artículo 3.1).

El mandato de los jueces es de nueve años. Mientras que los jueces de la Corte Permanente de Justicia Internacional eran renovables en conjunto, los de la Corte Internacional son renovados por tercios cada tres años. En tanto que el Estatuto de 1920 establecía miembros suplentes, el Protocolo de 1929 y el actual Estatuto sólo establecen miembros titulares.

El principio de la independencia de los jueces está planteado por el Estatuto. Son inamovibles, gozan de privilegios e inmunidades diplomáticas y están sometidos a diversas incompatibilidades.

No solamente un juez puede participar en el conocimiento de un asunto que interese a su país, sino que en el caso de que ningún juez representara a un Estado en litigio, éste puede nombrar un juez nacional para sentarse en la Corte y conocer del asunto. Lo mismo acontece en el procedimiento consultivo desde el Protocolo de 1929.

3. La Corte ejerce desde su origen una doble misión contenciosa y consultiva. Tiene, en primer término, una función contenciosa, jurisdiccional: juzga de las controversias de orden jurídico entre los Estados. Su competencia es interestatal: solamente los Estados pueden apelar a la Corte. Su jurisdicción es, sin embargo, facultativa para los Estados: las partes deben aceptar su competencia para que pueda dictar justicia. Pero pueden reconocer su jurisdicción como obligatoria, ya sea por un convenio o por una declaración de aceptación. Esta competencia obligatoria había sido prevista en 1939 por 564 instrumentos internacionales y por 54 declaraciones de aceptación. Hasta 1971 está prevista por centenares de instrumentos internacionales y por las declaraciones de 45 Estados.

El procedimiento contencioso está reglamentado por el Estatuto y por el Reglamento de la Corte; su actividad jurisdiccional se pone en marcha mediante notificación del compromiso o por solicitud escrita, a lo que sigue el periodo de instrucción escrita. Los debates orales y públicos se llevan a cabo en francés e inglés. La sentencia es dictada por mayoría y puede estar acompañada de opiniones separadas o disidentes surgidas de los miembros de la minoría. La ejecución de la sentencia, que no estaba considerada por el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, está prevista por la Carta de las Naciones Unidas (artículo 94).

La Corte tiene también una función consultiva: emite opiniones con-

sultivas sobre cuestiones de derecho. Esta competencia se ejerce a petición de ciertos órganos internacionales mucho más numerosos que en tiempos de la Corte Permanente y con exclusión de los Estados. El procedimiento consultivo sigue, en principio, el de los asuntos contenciosos. El efecto jurídico de la opinión emitida es meramente consultivo, pero a veces se convierte en obligatorio en ciertos casos excepcionales.

4. La jurisprudencia de la Corte presenta una importancia práctica y una importancia jurídica que es necesario apreciar.

La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia parece, desde un punto de vista práctico, menos satisfactoria que la de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Ésta emitió en veinte años 88 decisiones, de las cuales 31 fueron sentencias y 27 opiniones, además de otras numerosas órdenes. 12 asuntos fueron resueltos fuera de ella y los interesados se desistieron de la instancia.

Conoció asuntos de una gran diversidad, concernientes particularmente a Europa Central y Oriental, Medio Oriente, África. Sin embargo, intervino principalmente entre países europeos, a título de su metrópoli o de sus territorios de ultramar; los Estados Unidos, a pesar de tener un juez en la Corte, y la Unión Soviética no fueron nunca partes en un asunto ventilado ante ella.

La Corte Internacional ha emitido menos decisiones que su antecesora: 52 decisiones, de las cuales 31 son sentencias y 14 opiniones, 159 órdenes y 14 asuntos en los que ha habido desistimiento o impugnación de competencia.

Ha conocido generalmente de asuntos secundarios, litigios territoriales y marítimos limitados, arreglo de intereses nacidos de la guerra, medidas económicas o fiscales, nacionalizaciones, problemas de asilo y hasta de tutela de menores. Ha emitido decisiones excepcionalmente y sin éxito sobre controversias nacidas de la guerra fría (asunto del estrecho de Corfú, incidentes aéreos cerca de la cortina de hierro) o de la descolonización (Sudoeste Africano, paso en territorio de la India, Camerún septentrional), etcétera.

Ha sido muy desigual su conocimiento de asuntos respecto a los diversos países. Los más frecuentes han sido, sobre todo, en relación a los países occidentales: ha recibido de ellos, con frecuencia, competencia para conocer de las controversias, por vía de declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria o de compromiso, y la ha ejercido generalmente sin obstáculos. La Gran Bretaña ha figurado en 8 asuntos contenciosos, Francia en 4, Holanda en 3, los Estados Unidos en 3, Noruega y Bélgica en 2, nueve países diversos de Europa Occidental en un asunto. Ha conocido de casos concernientes a cinco países de América Latina, a cinco Estados asiáticos, de los que tres cuestionaban la competencia de la Corte; a cuatro países de África en asuntos recientes. No ha podido pronunciarse, propiamente hablando, respecto a ningún país de Europa Oriental,

salvo en el caso de Albania y se pronunció incompetente respecto a Bulgaria. Ha tenido que reconocer en otros casos que tales países se negaban a comparecer ante ella.

Sin embargo, la importancia de la jurisprudencia no se mide por el número de decisiones efectivamente dictadas. La existencia misma de la Corte facilita el arreglo de las controversias; las partes deseosas de evitar un procedimiento contencioso tienen tendencia a considerar el problema bajo un ángulo más jurídico y a resolverlo amistosamente. A veces llegan a un arreglo mientras el asunto se ventila en la Corte. Además, la intervención de la Corte impide el nacimiento de controversias posteriores.

Las soluciones que da a un asunto a veces limitado, interesa a menudo a toda la comunidad internacional; una decisión que se refiere a intereses limitados resuelve a menudo un punto de derecho muy importante.

5. La jurisprudencia de la Corte tiene, pues, una gran importancia jurídica. Ciertamente es que las decisiones de la Corte no tienen un efecto obligatorio sino en materia contenciosa, para las partes en litigio y respecto del caso juzgado (Estatuto, artículo 59); pero las decisiones judiciales constituyen un "medio auxiliar de determinación de las reglas de derecho". (Estatuto, artículo 38.1.d). Constituyen un precedente y una directiva para los sujetos del derecho internacional.

Esta jurisprudencia está también vinculada estrechamente con los problemas de la justicia internacional. La Corte es obligada por las partes a examinar cuidadosamente su competencia *ratione personae, materiae, temporis*. Debe resolver también diversos problemas de procedimiento. Por eso la jurisprudencia de la Corte enriquece considerablemente el derecho de la justicia internacional, sobre todo lo contencioso internacional.

Pero esta jurisprudencia está vinculada también a problemas de fondo. Las sentencias resuelven sobre todo problemas de derecho internacional clásico, respecto a los elementos y a las competencias del Estado y a las relaciones, particularmente convencionales, entre Estados. Las opiniones se ocupan de los problemas propios a las organizaciones internacionales: composición, competencias, relaciones externas, etcétera.

Por atareada que esté por problemas de competencia y de procedimiento, la Corte Internacional puede también consagrarse ampliamente a lo que es verdaderamente su razón de ser: decir el derecho internacional. Ella contribuye así a desarrollar no sólo el derecho internacional clásico, el de los Estados soberanos, sino el derecho de los organismos internacionales.

II. LA APORTACIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL CLÁSICO

Si el derecho internacional clásico está fundado en la existencia de Estados soberanos, la jurisprudencia de la Corte Internacional hace al mismo una importante contribución. Solamente a los Estados les es permitido com-

parecer ante ella por la vía contenciosa; ellos constituyen el objeto principal de sus exámenes, ya sea, en sí mismos, o en sus relaciones recíprocas.

A) *El Estado*. Por Estados, la Corte entiende aquellas “entidades políticas, iguales en derechos, de estructura semejante y dependientes del derecho internacional” (Opinión del 11 de abril de 1949, sobre reparación de daños). La Corte se apega en su análisis a los elementos del Estado, territorio y población y a sus competencias, territoriales y personales.

1. *Los elementos del Estado*. La jurisprudencia de la Corte se interesa efectivamente, sobre todo, en dos elementos del Estado: el territorio y la población y, menos directamente, en el elemento gubernamental que, sin embargo, es siempre tomado en consideración cuando se trata de determinar a qué Estado pertenece la soberanía.

1.1 *El territorio*. La Corte ha conocido de litigios en los que están en juego territorios exiguos sin haber sido llamada a conocer sobre el litigio de la Antártida; pero sin embargo, ha hecho una rica aportación a la doctrina a través de sus sentencias en otros casos sobre esta materia.

Adquisición de territorio

Al mismo tiempo que la Corte trata de averiguar concretamente los títulos de los Estados sobre esos territorios, pone en práctica y considera los modos de adquisición de la soberanía territorial. Algunos de estos modos de adquisición interesan las relaciones mutuas de los Estados en litigio.

En primer término está el problema de la conquista. La Corte examina los efectos de la conquista de Inglaterra por los normandos y de la Normandía por Francia, a propósito del destino de las Islas Minquiers y de las Islas Ecréhous (Sentencia del 17 de noviembre de 1953).

Lo que cuenta, sobre todo, es la voluntad común de las partes. La Corte Internacional busca, tanto como es posible, esa voluntad en los tratados. A propósito de las Islas Minquiers y de las Islas Ecréhous, ella analiza con el máximo detalle y desmenuza, por así decirlo, diversos tratados medievales y convenios sobre pesquerías sin encontrar en ellos disposiciones sobre la soberanía (17 de noviembre de 1953). A propósito de los enclaves portugueses en territorio de la India, la Corte no encuentra en el Tratado de Poona sino un arrendamiento de orden fiscal, sin cesión de soberanía (Sentencia del 12 de abril de 1960, sobre el derecho de paso).

En otros dos casos, la Corte se refiere a convenios de delimitación, pero se ve obligada a oponerles la voluntad efectiva de las partes.

La Corte busca en efecto la voluntad de la comisión de delimitación.

En el caso de las parcelas de Baarle, un convenio de delimitación preveía el mantenimiento del *statu quo* y remitía a un acta judicial anterior que atribuía las parcelas a Holanda; pero la comisión de delimitación afirmaba transcribir palabra por palabra el acta y sin embargo atribuía las parcelas a Bélgica; la Corte subraya que la Comisión tenía competencia para delimitar los territorios y quería atribuir las parcelas a Bélgica (20 de junio de 1959, caso sobre ciertas parcelas fronterizas). En el caso de Preah Vihear, el convenio que preveía la delimitación imponía especialmente seguir la línea de partición de las aguas; los oficiales franceses procedieron a las operaciones de levantamiento y establecimiento de las cartas; pero no respetaron la línea impuesta (15 de junio de 1962, sobre el Templo de Preah Vihear).

La Corte se inclina entonces sobre la actitud última de las partes y encuentra en la misma, cada vez, una confirmación de la delimitación. A propósito de las parcelas de Baarle, la autoridad catastral belga pidió varias veces al ministro de asuntos exteriores pronunciarse sobre el asunto y éste llamó la atención de La Haya sobre el mismo; Bélgica en una convención jamás ratificada, dijo consentir en "ceder" las parcelas; en cambio, Holanda no rechazó las pretensiones belgas sino hasta el año de 1922; por consiguiente, las parcelas parecerían ser belgas. En el asunto de Preah Vihear, Tailandia consintió en la carta sin hacer ninguna investigación adicional, no reaccionó ante el descubrimiento del error de delimitación y no protestó con motivo de las diversas negociaciones y arbitrajes; por consiguiente, la parcela sigue siendo propiedad de Camboya. Así la "interpretación por la práctica hace triunfar la frontera trazada sobre la Carta sobre aquella resultante del convenio", pero esto siempre en nombre de la voluntad de las partes.

Otros modos de adquisición no conciernen sino a un Estado en sus relaciones sólo con el territorio. La Corte aprecia sus actos y hechos posesorios, sus intenciones, con el fin de distinguir los actos de soberanía de los actos de simple administración.

Toma en cuenta, primeramente, la naturaleza de los actos o los hechos. En las Islas Ecréhous, la Gran Bretaña ha realizado actos de legislación local, de jurisdicción, de fiscalidad; en tanto que Francia no ha hecho sino una vigilancia de la pesca y de las visitas. En las Islas Minquiers, la Gran Bretaña ha realizado actos de administración local ordinarios; Francia, actos de balizamiento y de iluminación. Sólo la Gran Bretaña parece haberse conducido como soberana.

En las parcelas de Baarle, Bélgica ha afirmado su soberanía por medio de la publicación de cartas de estado mayor que presentan a las parcelas en litigio como belgas, inscripciones en el catastro, inscripciones de actos de traslación. Holanda ha llevado a cabo actos significativos, pero juzgados como insuficientes para desplazar la soberanía belga establecida a través de inscripción en el catastro, inscripción de las traslaciones inmobiliarias, inscripción de actas del estado civil, percepción del impuesto

sobre la tenencia, y aun un proceso intentado ante el tribunal holandés de Breda por la comuna de Baarle-Hertog. Actos comparables se encuentran comprobados en el asunto de Preah Vihear.

La Corte toma en cuenta también el nivel de las autoridades que han llevado a cabo esos actos, declarando que los actos de autoridades locales no podrían anular la actitud del gobierno (Sentencia del 15 de junio de 1962, en el caso del Templo de Preah Vihear).

Delimitación del territorio

“La delimitación es una operación que consiste en determinar los límites de una zona que ya dependen en principio del Estado y no en definir esta zona de nuevo” (Sentencia del 20 de febrero de 1969, sobre la Plataforma Continental).

La delimitación del territorio terrestre se reduce al problema de su atribución en la medida en que dependa de reglas especial o particularmente convencionales: determinar el trazo de la frontera equivale a determinar la suerte de las parcelas fronterizas ya sea en Baarle o en Preah Vihear.

La delimitación del territorio marítimo plantea un problema diferente en la medida en que está sometida a ciertas reglas del derecho internacional.

Un Estado no tiene atribución o título para delimitar los espacios marítimos por medio de una reglamentación interna; una delimitación tiene siempre un aspecto internacional y su validez debe apreciarse con relación al derecho internacional (Sentencia del 18 de diciembre de 1951, sobre el asunto de las pesquerías).

La Corte fija el criterio primeramente sobre la determinación y la longitud de las líneas de base a partir de las cuales la anchura de esas aguas debe medirse. La determinación de las líneas de base debe seguir la línea de las aguas bajas. ¿De qué manera? La Corte, fundándose en datos geográficos de la materia, dice que la línea de las aguas bajas no es la de la tierra firme, sino la del *skjaergaard*, es decir, de todo el archipiélago costero. La Corte aprecia después los tres métodos de determinación:

1. El método del trazado paralelo, que marca el límite de las aguas paralelamente a las costas en todas sus sinuosidades, es inaplicable en razón de lo recortado de la costa.
2. El método de los arcos de círculo, que delimita las aguas territoriales por arcos de círculo diseñados a partir de puntos fijos de la tierra firme, de las islas, rocas, islotes, es nueva y no obligatoria en derecho.
3. El principio de que el límite de las aguas territoriales debe seguir la dirección general de la costa y el método de las líneas de base rectas han sido adoptados por varios Estados sin encontrar objecio-

nes. Por lo tanto, si el límite de las aguas territoriales debe seguir la línea externa del *skjaergaard*, las líneas de base rectas pueden ser establecidas no solamente en las bahías, sino también a través de los espacios marítimos entre islas, islotes y rocas.

La longitud de las líneas de base queda por determinar. Se ha alegado, la regla de las diez millas, pero como no resulta de una práctica estatal y arbitral constante y uniforme y no tiene la autoridad de un principio general del derecho internacional, ha sido constantemente rechazada por Noruega.

La Corte deduce ciertos criterios de la naturaleza de las aguas territoriales: las líneas de base no deben alejarse sensiblemente de la dirección general de la costa; se deben tomar en consideración los intereses económicos de la región, si su realidad e importancia son confirmados por una larga práctica. El tribunal admite, por último, una delimitación, cuando el sistema ha sido aplicado por largo tiempo, de manera constante e ininterrumpida, y ha sido tolerado por los demás Estados, particularmente por una potencia marítima importante como la Gran Bretaña (Sentencia del 18 de diciembre de 1951, sobre las pesquerías).

En cambio, la Corte no ha tenido que pronunciarse sobre la anchura de las aguas territoriales.

La delimitación de la plataforma continental no da lugar a una "repartición justa y equitativa", sino obedece a ciertas reglas internacionales; porque no cabe la posibilidad de repartir un todo indiviso, sino delimitar ciertas zonas sometidas a soberanía: la plataforma "puede ser considerada como formando parte verdaderamente del territorio".

El principio llamado "equidistancia-circunstancias especiales" basa la delimitación en la equidistancia respecto a las líneas de base, a menos que existan circunstancias especiales. Es una regla convencional, inscrita en el artículo 6 del Convenio de Ginebra sobre la Plataforma Continental, válido entre los Estados que han ratificado el convenio o reconocido la regla. No es una regla consuetudinaria, sea natural o positiva, por lo que los Estados han vacilado en formularla en Ginebra, muchos Estados partes en la convención haciendo reservas sobre este punto y otros Estados haciendo aparecer en sus delimitaciones pocos precedentes y ninguna *opinio juris*.

Ciertas "reglas y principios de derecho" han sido elaborados por la Corte "a partir de principios muy generales":

1. La obligación de "negociar con el fin de realizar un acuerdo".
2. La "regla de la equidad" que no siempre implica pasar por el método de la equidistancia, pero supone "el empleo concurrente de diversos métodos" y la consideración de diversos factores, geología, geografía, unidad de yacimiento, relación razonable con la naturaleza de las costas.

La delimitación corresponde a las partes y no puede ser hecha por la Corte *ex aequo et bono* (Sentencia del 20 de febrero de 1949, sobre la plataforma continental).

1.2 *La nacionalidad*. La Corte ha definido las condiciones de atribución de la nacionalidad respecto a las personas físicas y morales.

La nacionalidad de las personas físicas

La Sentencia del 6 de abril de 1955 (Caso Nottebohm) regula las condiciones de atribución de la nacionalidad de los individuos fundándose en la práctica estatal y arbitral, y en la doctrina.

Ante todo, la nacionalidad entra dentro de la competencia nacional del Estado; la atribución de la nacionalidad está regulada por la legislación nacional a menos de un acuerdo general, pero debe llenar dos condiciones.

Por un lado, la nacionalidad debe ser conforme al derecho internacional para ser reconocida por los demás Estados. Los efectos de la nacionalidad, particularmente la protección diplomática, se sitúan en el plano internacional; la atribución de la nacionalidad debe ser tal que responda a la idea que en el derecho internacional se hace de ella.

Por eso, la nacionalidad debe ser efectiva. Debe estar en concordancia con la situación del interesado, con su domicilio, con la sede de sus intereses, con sus vínculos de familia, con su participación en la vida pública . . . ; en suma, no debe ser sino la expresión jurídica del "vínculo efectivo" del individuo a un Estado. Una naturalización no puede ser tomada en consideración cuando es otorgada a un individuo desprovisto de todo vínculo con el país, en condiciones excepcionales de rapidez y de benevolencia, con el fin de reemplazar la calidad de súbdito de un Estado beligerante por aquella de súbdito de un Estado neutral.

La Corte puede, pues, oponer la estrechez de los vínculos del señor Nottebohm con Alemania, de donde es originario y con Guatemala, en donde tiene su residencia y el centro de sus actividades, con la ausencia de vínculos entre este individuo y el principado de Liechtenstein, para negar la demanda de protección diplomática de este último.

La nacionalidad de las personas morales

La Corte establece "un vínculo entre una sociedad y el Estado con el fin de otorgar protección diplomática" y regula sus condiciones de atribución con referencia a la práctica más que a la sentencia en el caso Nottebohm. Este vínculo está determinado por el lugar de constitución de la sociedad y por el de la sede social.

Además, según ciertos Estados, tal vínculo debería ser efectivo, implicar un "lazo de relación efectiva" pudiendo referirse a la dirección, al

control, a la posesión, pero no a las actividades. De tal manera, la Barcelona Traction puede tener "la nacionalidad canadiense" en razón del derecho que rige su constitución y su sede, con asociados belgas en un 88%, y una actividad en España (Sentencia del 5 de febrero de 1970, sobre el asunto de la Barcelona Traction, segunda fase).

2. *Las competencias del Estado.* La Corte se apega principalmente a dos formas de competencia estatales: la competencia territorial que se ejerce *ratione loci* sobre el territorio y, por consiguiente, sobre la población que allí se encuentra, y la competencia personal, que se ejerce *ratione personae* sobre los nacionales del Estado; les impone, por otra parte, la importante derogación del derecho de asilo. Ella no se detiene sino de una manera incidental en la competencia *ratione temporis*, a propósito del nacimiento del Estado de Israel (Opinión del 11 de abril de 1949, sobre la reparación de daños) y de la sucesión de India y de Camboya en lugar de la potencia colonial (Sentencia del 12 de abril de 1960, sobre el derecho de paso; del 15 de junio de 1962, sobre el Templo de Preah Vihear).

2.1 *Las competencias territoriales.* La Corte consagra, primeramente, la competencia territorial, la que se ejerce sobre el territorio del Estado, terrestre o marítimo, frente a todos los individuos, que en él se encuentren, ya sean nacionales o extranjeros. Ella les atribuye diversas clases de consecuencias.

Los derechos exclusivos

El Estado territorial ejerce derechos exclusivos sobre su territorio frente a todos: especialmente de legislación, de administración y de jurisdicción, en algunas materias esenciales.

Por lo cual, el Estado territorial puede regular diversas cuestiones que interesan a los menores: enseñanza obligatoria, vigilancia sanitaria, formación profesional. Esta legislación tiende no solamente a proteger al menor, sino a garantizar a la sociedad en contra de ciertos problemas. Debe la misma extenderse a todos los menores que se encuentren en su territorio, ya sean nacionales o extranjeros, bajo patria potestad o bajo tutela, pero no tiene por qué extenderse a los menores nacionales que se encuentran en el extranjero. Debe ser aplicada por la administración nacional, la que sólo puede aplicar dicha legislación.

La Convención de 1902 sobre la tutela de los menores, que somete la tutela a la ley nacional del menor, no les confiere ninguna inmunidad frente a la ley nacional en dichas materias. ¿Contiene dicho convenio alguna reserva implícita que autoriza a dejar de aplicar la ley nacional por motivos de orden público? La Corte no juzga necesario precisar tal interrogante. La convención no plantea ninguna regla que se oponga a la

legislación territorial en esos campos; se contenta con reglamentar los conflictos de leyes sobre tutela; la legislación territorial a su vez, regula un problema social que interesa a todo su territorio, y sólo a él. En estas condiciones, la convención no puede crear obligaciones en un campo ajeno a sus preocupaciones; la ley territorial puede válidamente proveer a la protección social de la infancia aunque sean extranjeros (Sentencia del 28 de noviembre de 1958, sobre la aplicación de la convención sobre tutela de menores).

El Estado territorial puede regular el estatuto económico y fiscal de las personas que se encuentran en su territorio, aunque sean extranjeros, salvo acuerdo en contrario. La ley marroquí puede válidamente regular el de los ciudadanos norteamericanos; ni los tratados, ni la cláusula de la nación más favorecida les han conferido inmunidad (Sentencia del 22 de julio de 1952, sobre los ciudadanos norteamericanos en Marruecos).

Las obligaciones pasivas: el paso

Si el Estado territorial puede, en principio, impedir el paso de extranjeros a través de su territorio, debe a menudo soportar su paso por su territorio terrestre o marítimo.

El paso terrestre. El paso terrestre puede constituir un derecho cuando permite unir entre sí territorios enclavados. Pero no ha sido reconocido en beneficio de Portugal sobre territorio indio sino bajo tres reservas:

Por una parte, el paso había sido consagrado por la práctica. La Corte dice estar en presencia de un caso concreto y especial, de un asunto que se remonta a un período y concierne a una región en donde las relaciones entre Estados vecinos no son reguladas con precisión por el derecho. Ella se funda en la práctica aceptada por las partes y que rige sus relaciones. Evita el tener que razonar con base en la costumbre internacional general o en los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas.

En segundo lugar, ese paso es no armado. Está abierto a las personas privadas y a los funcionarios civiles, salvo el control normal, y a las mercaderías, salvo los reglamentos y controles de aduana y de seguridad; en efecto este paso ha sido aceptado por las partes como algo legal. Pero se niega el paso a las fuerzas armadas, a la policía armada, a las armas y municiones; tal paso no ha sido nunca considerado como un derecho; ha estado sometido la mayor parte de las veces a autorización previa, a veces a declaración; el hecho que la autorización se haya casi siempre otorgado, y que algunas veces no haya sido ni siquiera solicitada, no puede crear un derecho a ser dispensado de tal requisito.

Finalmente, puede negarse el paso en ciertas condiciones. Está sometido en efecto al poder de reglamentación y control del Estado territorial. La India ha podido, ante los acontecimientos que se han producido en los

enclaves y que han suscitado una cierta tensión en las regiones vecinas, negar el paso a los ciudadanos portugueses de origen europeo, a los ciudadanos portugueses de origen indio al servicio del gobierno portugués, a una delegación portuguesa (Sentencia del 12 de abril de 1960, sobre el derecho de paso sobre el territorio indio).

El paso marítimo. En las aguas territoriales, puede constituir un derecho en ciertas condiciones definidas por la Corte. "De acuerdo con la opinión de la Corte, se admite generalmente como conforme a la costumbre internacional que los Estados, en tiempos de paz, posean el derecho de hacer pasar sus navíos de guerra por los estrechos que sirven, para los fines de la navegación internacional, para poner en comunicación dos partes de altamar, sin obtener previamente el acuerdo del Estado ribereño, con tal que dicho paso sea inocente. A menos que una convención internacional disponga de otra manera, un Estado ribereño no tiene el derecho de prohibir dicho paso por los estrechos en tiempos de paz."

El paso supone, pues, un estrecho que reúne ciertas condiciones. La Corte rechaza los criterios del volumen del tráfico, de la importancia para la navegación, del carácter obligatorio del itinerario. Ella prefiere considerar los criterios "de la situación geográfica del estrecho por lo que pone en comunicación dos partes de altamar" y de su utilización por la navegación internacional. Ella hace entrar al Estrecho de Corfú "en la categoría de las vías navegables internacionales en donde el paso no podría ser prohibido en tiempos de paz por un Estado ribereño".

El paso por el mismo es libre. No puede ser prohibido o sometido a autorización por el Estado ribereño. Pero puede ser reglamentado en circunstancias excepcionales tales como un "estado de guerra técnico".

El paso debe ser inocente. Lo es si está destinado a afirmar un derecho de paso injustamente desconocido y si los hombres no están en su puesto de combate o de observación sino para evitar incidentes con la costa. Deja de ser inocente si se acompaña de actos agresivos, tales como disparos a tierra, u operaciones que van más del simple paso, tales como el desmantelamiento de minas en las aguas territoriales.

Pero ¿estas obligaciones pasivas llevan consigo también una obligación activa, la de facilitar el paso?

Las obligaciones activas

El Estado tiene primeramente una obligación de abstención: no debe utilizar su territorio con fines agresivos o peligrosos como por ejemplo: la siembra de minas explosivas en sus aguas territoriales.

Tiene, además, una obligación de prevención: "obligación de no dejar utilizar su territorio para los fines de actos contrarios a los derechos de los demás Estados", por ejemplo, no dejar sembrar minas en sus aguas: "Un Estado en el territorio del cual se produce un acto contrario al

derecho internacional puede ser invitado a que lo explique... Él no puede sustraerse a esta explicación limitándose a responder que ignora las circunstancias de dicho acto o sus autores. Puede, hasta en cierto punto, ser obligado a proporcionar explicaciones sobre el uso que haga de los medios de información o de averiguación a su disposición."

Tiene, por último, la obligación de poner remedio a tal situación. Ciertamente no tiene la obligación material de limpiar las aguas de las minas en ellas sembradas. Pero tiene la de "hacer conocer e informar, en interés de la navegación, la existencia de campos de minas en las aguas territoriales y de advertir a los navíos... del peligro inminente". La Corte agrega la obligación de proceder a una instrucción judicial. La violación de dichas obligaciones por el Estado ribereño compromete su responsabilidad internacional (Sentencia del 9 de abril de 1949, sobre el Estrecho de Corfú).

2.2 *Las competencias personales.* La competencia personal se ejerce solamente respecto a los nacionales, situados o no en el territorio. La Corte deriva de ello varias consecuencias.

La legislación

Cada Estado ejerce la legislación y aplica la misma respecto a sus nacionales, aun fuera del territorio, en ciertos campos definidos.

Así, la ley nacional rige la tutela del menor. La convención de 1902 lo precisa con el fin de regular un conflicto de leyes de derecho privado y de escoger la ley susceptible de ser aplicada al menor por el juez. Precisa que la administración tutelar se extiende a la persona del menor y a sus bienes. Ninguna autoridad extranjera podría desconocer esta tutela o darle una rival (Sentencia del 28 de noviembre de 1958, sobre la aplicación de la convención sobre tutela de menores).

La ley nacional se aplicaba ampliamente en el sistema de las capitulaciones; en efecto, el país beneficiario debía dar su asentimiento a las leyes para que ellas se aplicasen a sus propios ciudadanos. Pero los Estados Unidos no gozaban de ese régimen, a falta de una convención al respecto; solamente, la Corte consular debía intervenir para aplicar las leyes marroquíes a los ciudadanos americanos (Sentencia del 27 de agosto de 1952, sobre los ciudadanos norteamericanos en Marruecos).

La jurisdicción

Cada Estado ejerce ciertos poderes de jurisdicción y hasta de administración respecto de sus ciudadanos aun cuando éstos se encuentren en el extranjero.

Así, la autoridad competente puede tomar ciertas decisiones aplicando el régimen nacional de la tutela a una menor, nacional del Estado, pero

instalada en el extranjero (Sentencia del 28 de noviembre de 1958, citada anteriormente).

Antes, las autoridades consulares poseían mayores poderes respecto a los ciudadanos, no solamente en el marco del régimen de las capitulaciones, sino en el sistema de relaciones establecidas entre los Estados Unidos y Marruecos. Los cónsules americanos podían ejercer su jurisdicción en la zona francesa, según los términos del tratado respectivo de 1836 con Marruecos, para las controversias civiles o penales entre ciudadanos americanos, para los asuntos civiles o criminales enderezados contra ciudadanos americanos; pero no estaban autorizados a ejercer su jurisdicción en otros casos (Sentencia del 27 de agosto de 1952, ya citada).

La protección diplomática

Cada Estado ejerce la protección diplomática de sus nacionales: toma a su cargo sus intereses y su causa ante los demás Estados, ante los órganos de arreglo pacífico y ante la Corte.

Esta protección plantea ciertos problemas de admisibilidad. Supone, primeramente, un vínculo de nacionalidad entre el Estado protector y el protegido, ya sea un individuo o una persona moral.

De tal manera, el gobierno helénico toma conocimiento y hace suya la causa de Ambatielos, y Gran Bretaña lo hace por su parte a nombre de la Anglo-Iranian Oil Co. Pero el Estado no puede ejercer la protección diplomática de una persona que no es su súbdito. Liechtenstein no puede de tal suerte válidamente actuar a nombre del señor Nottebohm.

La protección supone igualmente una calidad del Estado a actuar, por lo tanto, un derecho. Si una protección general se acompaña a las obligaciones fundamentales de los Estados hacia la comunidad internacional (persona humana...), la protección diplomática supone la violación de una obligación hacia un Estado, y no puede emanar sino de este último: "solamente la parte hacia la que una obligación internacional existe, puede presentar una reclamación en razón de la violación de la parte hacia la que la obligación internacional existe" (Opinión del 11 de abril de 1949, sobre reparación de daños).

El Estado tiene el derecho a proteger los derechos de sus ciudadanos. Puede, por lo tanto, proteger a una sociedad nacional contra una medida que la afecte y a accionistas de dicha nacionalidad contra una medida que los afecte, igualmente, en tanto que nacionales. Pero ante una medida que afecte a una sociedad, cuyos accionistas tienen en su mayoría otra nacionalidad, el Estado nacional de la sociedad mencionada puede protegerla, pero el Estado nacional de los accionistas no puede protegerlos en principio. El silencio del derecho internacional "puede difícilmente ser interpretado en favor de los accionistas". Sin embargo, el derecho interno permite "levantar el velo social" y "hacer abstracción de la personalidad

jurídica en interés de los asociados". Y ciertas soluciones particulares: legislación contra los bienes enemigos, nacionalizaciones, pueden ser invocadas pero no generalizadas.

Dos situaciones permiten la acción del Estado de los asociados: aquella en que la sociedad deja de existir, y aquella otra en que el Estado de la sociedad no tiene calidad para actuar. Pero dos hechos eliminan la acción del Estado de los asociados: el que la sociedad tenga capacidad para defender sus derechos y los de sus asociados, y que su Estado pueda protegerla diplomáticamente.

Un Estado no tiene calidad para actuar a cuenta de los nacionales o por su propia cuenta sino en caso de violación de sus derechos, es decir, de ciertas reglas de derecho internacional. La acción no la otorga a un Estado que no sea el Estado nacional de la sociedad en cuestión ninguna regla internacional general; podría hacerlo por reglas convencionales particulares, por instrumentos relativos a los derechos del hombre. No podría darse con equidad al Estado de los accionistas más que en el caso que el Estado responsable fuese a la vez el Estado nacional de la sociedad. Pero entonces, podría abrirse esa acción no solamente al Estado nacional de los principales accionistas, sino todos los Estados interesados, lo que engendraría la multiplicación de los recursos y la inseguridad jurídica (Sentencia del 5 de febrero de 1970, sobre la *Barcelona Traction*, segunda fase).

La protección diplomática corresponde a un poder discrecional del Estado, haya o no jurisdicción obligatoria. "Un Estado puede ejercer su protección diplomática por los medios y en la medida que juzgue apropiadas"; puede no ejercerla o dejarlo de hacer; los interesados en ese caso no disponen de ningún recurso en derecho internacional (Sentencia del 5 de febrero de 1970, sobre la *Barcelona Traction*, segunda fase).

El Estado tiene, pues, ciertas competencias sobre los individuos que habiten su territorio y ciertas otras competencias sobre los individuos que posean su nacionalidad. Puede, sin embargo, dar asilo, en ciertas condiciones, a personas que no llenen dichas condiciones.

2.3 *El asilo*. El asilo debe ser tratado aparte porque sale de las competencias precedentes y puede derogar una u otra. La Corte ha precisado sus circunstancias más que su práctica.

Las circunstancias del asilo

La Corte consagra una sentencia a definir las circunstancias de lugar y de hecho del asilo (Sentencia del 20 de noviembre de 1950, sobre el derecho de asilo).

El asilo puede situarse en dos lugares diferentes.

El asilo territorial se ofrece en el territorio del Estado de refugio. El Estado de refugio ejerce su soberanía territorial y el Estado de origen

pierde sus competencias. "Una decisión relativa a la extradición implica solamente el ejercicio normal de la soberanía territorial; el refugiado se encuentra fuera del Estado en el que ha cometido el delito y una decisión de otorgarle el asilo no deroga de ninguna manera el principio de la soberanía de este Estado." Es este asilo solamente el que es considerado por la Corte.

El asilo diplomático es ofrecido en la Embajada del Estado de refugio. Aquí, "el refugiado se encuentra en el territorio del Estado en el que ha cometido el delito. La decisión de otorgar el asilo diplomático implica una derogación de la soberanía territorial. Sustrae al delincuente a la justicia de éste y constituye una intervención en un campo que compete exclusivamente al Estado territorial. Tal derogación a la soberanía territorial no podría admitirse a menos que el fundamento jurídico de ella no se establezca perfectamente".

Por eso dicho asilo supone ciertas circunstancias de hecho, averiguadas por la Corte en la Convención de La Habana sobre el asilo.

Es menester primeramente un delito político. Se prohíbe otorgar asilo a personas acusadas o condenadas por delitos de derecho común. La naturaleza del delito resulta del acta de acusación formulada por los jueces.

Es menester, por otra parte, el elemento de urgencia. Conforme a la convención la Corte exige "la inminencia o la persistencia de un peligro para el refugiado". Existe peligro cuando la justicia está subordinada al ejecutivo, cuando se suspenden las garantías judiciales. No existe un peligro suficiente cuando hay estado de sitio o simples diligencias judiciales regulares. En tales casos, la práctica latinoamericana puede otorgar el asilo por razones de cortesía y de oportunidad políticas, no por razones de obligación jurídica; la práctica latinoamericana sigue estando apegada al principio de no intervención. La convención no ha podido reemplazar esta práctica por un régimen que garantice el asilo a los refugiados políticos (Sentencia del 20 de noviembre de 1950, sobre el derecho de asilo).

La práctica del asilo

Pero la práctica del asilo deja subsistentes competencias concurrentes de los Estados interesados y suscita, por lo tanto, controversias al respecto, ya sea sobre la apreciación de las condiciones del asilo, en particular la calificación del delito, ya sea sobre las modalidades de su cesación.

La calificación del delito. Ésta no es hecha por el Estado de refugio de una manera unilateral, definitiva, obligatoria, para el otro Estado; es hecha por los dos Estados al mismo título.

La Corte aparta del debate varios convenios multilaterales. El acuerdo bolivariano de 1911 reconoce el asilo de conformidad con los principios del derecho internacional, pero éstos no reconocen ninguna regla de calificación unilateral. La convención de La Habana sobre asilo, del año de

1928, no plantea esta regla ni de manera expresa, ni en forma implícita. Una calificación unilateral no es inherente a la institución del asilo; un derecho igual de calificación debe, a falta de reglas convencionales, ser reconocido a los Estados interesados. La convención somete el asilo a condiciones restrictivas. Las reglas jurídicas de un Estado, concernientes a la calificación de los delitos, no se pueden oponer a los otros Estados, sin lo cual la extensión de las obligaciones de un Estado se haría depender del derecho de otro. Las reglas jurídicas del primer Estado limitan su derecho de otorgar asilo. Finalmente, la Convención de Montevideo de 1937 sobre asilo no ha sido ratificada, por una parte, y, por lo tanto, no puede serle opuesta.

La Corte analiza después el "derecho internacional americano" en la materia. La parte que invoca una costumbre, regional o local, debe probar que se ha constituido ésta de manera obligatoria para las partes. Ahora bien, Colombia invoca tratados de extradición que no contienen ninguna regla sobre la calificación, o no ratificados, y precedentes demasiado inciertos o contradictorios para revelar un uso constante, uniforme, aceptado como derecho. Las dos partes pueden, pues, dar cada una su calificación del delito y, por lo tanto, discrepar en cuanto a la validez del asilo.

La cesación del asilo. La condición de urgencia impuesta al asilo implica que debe ser provisional y debe cesar tan pronto como sea posible. La cesación del asilo está regulada por la Convención de La Habana en esta perspectiva. Los delincuentes de derecho común son remitidos a la justicia local. Los delincuentes políticos deben gozar de un salvoconducto y de las garantías necesarias para su salida del país con la doble condición de que el asilo haya sido regularmente otorgado y mantenido y que el reenvío del refugiado fuera del territorio haya sido demandado por el Estado territorial.

Pero el problema no está regulado en el caso en que el asilo se juzgue como irregular por el Estado territorial como en el asunto Haya de la Torre. El Estado de asilo no tiene la obligación de entregar al refugiado, ni ninguna obligación de asistencia; esta interpretación se funda en el espíritu de la convención y en la tradición latinoamericana.

En estas condiciones, la Corte Internacional admite a la vez que el otorgamiento del asilo político es irregular y que el refugiado debe ser tratado como refugiado político; que el asilo debe cesar y que el refugiado no debe ser entregado. La Corte no ve ninguna contradicción en esas proposiciones, porque el asilo puede cesar de otra manera que no sea la entrega del refugiado; pero se niega a indicar esas otras soluciones, cuya elección no corresponde a la función judicial, para lo cual se remite a las partes para encontrar la solución adecuada según todas las consideraciones de conveniencias y oportunidad (Sentencia del 15 de junio de 1951, sobre el caso de Haya de la Torre).

B) *Las relaciones entre Estados.* La Corte regula de dos maneras las relaciones entre Estados. Por una parte, se ocupa de sus relaciones jurídicas, de las fuentes del derecho a cuya formación participan. Y, por otra parte, se interesa en sus relaciones políticas, en el contenido y la materia misma de dichas relaciones.

1. *Las fuentes del Derecho Internacional.* Las relaciones jurídicas entre los Estados son reguladas por normas jurídicas reconocidas como obligatorias por los Estados y aplicadas por la Corte. Las principales son enunciadas por el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que reproduce el artículo 38 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional; van a ser éstas estudiadas una a una. Una última, el acto unilateral, será objeto de estudio más adelante.

1.1 *Las convenciones internacionales.* El artículo 38, fracción primera, cita en primer término "las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes". La jurisprudencia pone en práctica la idea de consensualismo a propósito de su validez, de su alcance, de su interpretación y de las reservas a las mismas.

La validez de las convenciones

La Corte define primeramente varias condiciones de su validez. Se ocupa en primer término, del consentimiento. Según esto el consentimiento debe estar exento de error: la Corte ha apreciado en dos ocasiones este vicio a propósito de convenciones de delimitación.

La primera vez, se trataba de un pretendido error de transcripción; el acta comunal decía transcribir otra acta comunal que atribuía una parcela a Holanda y las atribuía a Bélgica; la Corte rechaza la querrela, en vista de que el acta descriptiva podía fundarse sobre otro ejemplar del acta comunal redactado de manera diferente que la comisión de delimitación, podía conocer esta diferencia y atribuir la soberanía a quien ella quisiese (Sentencia del 20 de junio de 1959, sobre las parcelas fronterizas). La segunda ocasión, se trataba de un error de delimitación: la delimitación debía fundarse en la línea de división de las aguas y en la realidad no correspondía a la misma; la Corte lo admite, pero constata la aquiescencia de las autoridades tailandesas (Sentencia del 15 de junio de 1962, sobre el Templo de Preah Vihear).

El consentimiento debe ser libre, exento de coacción. "Las partes deben ser libres de aceptar o de rechazar los términos de un proyecto de acuerdo; ninguna de las partes puede pretender imponer sus condiciones a la otra" (Opinión del 11 de julio de 1950, sobre el sudoeste africano). Una potencia mandataria no puede por lo tanto ser obligada a firmar un acuerdo de tutela.

La Corte se avoca en seguida a estudiar la capacidad de las partes. Las convenciones son celebradas entre dos o varios Estados. Son, a veces, preparadas además bajo los auspicios de la ONU, como la Convención de 1948 sobre la prevención y la represión del delito de genocidio. Pueden también ser celebradas entre un Estado y una organización de tutela; pero no pueden celebrarse con una persona privada: el acuerdo llevado a cabo en 1933 entre el Irán y la Anglo Iranian Oil Company no es sino un contrato de concesión (Sentencia del 22 de julio de 1952, sobre el asunto de la AIOC).

La Corte se preocupa menos de la forma. Admite que una declaración forme parte de un tratado, por su forma, porque ambos constituyen un solo documento y son publicados, registrados, ratificados conjuntamente, y por su contenido (Sentencia del 1º de julio de 1952, sobre el asunto Ambatielos). Declara que el registro de los tratados, destinado a impedir los tratados secretos, se aplica a los tratados celebrados entre Estados, no a los tratados llevados a cabo con una organización universal como el caso de un mandato (Sentencia del 21 de diciembre de 1962, sobre el sudocste africano).

La Corte aborda igualmente la puesta en práctica de las nulidades. Considera que una parte que no ha manifestado a tiempo sus agravios ya no puede hacerlo posteriormente. De tal manera, que el Tratado de Poona celebrado en 1779 entre Portugal y un soberano marathe no ha sido nunca impugnado y es, por lo tanto, válido (Sentencia del 12 de abril de 1960, sobre el derecho de paso); la delimitación de la frontera entre Camboya y Tailandia, que no seguía la línea de división de las aguas pero que no suscitó impugnación a pesar del descubrimiento del error, no puede ser puesta en duda en cuanto a su validez (Sentencia del 15 de junio de 1962, sobre el Templo de Preah Vihear).

El alcance de las convenciones

La participación en las convenciones. “El derecho de convertirse en parte de una convención no traduce una noción jurídica bien definida: un Estado no deriva ningún derecho de la convención, de su calidad de miembro o de la invitación dirigida por el Secretario General (de las Naciones Unidas).” (Opinión del 28 de mayo de 1951, sobre las reservas a la convención para la prevención y represión del delito de genocidio) y la participación resulta de la firma de la ratificación de la convención.

La firma implica y conlleva ciertos efectos, un “estatuto provisional”: “Ese estatuto puede disminuir en fuerza o en importancia después de la entrada en vigor de la convención; pero ese estatuto autorizaría en materia de objeciones, un tratamiento más favorable a los Estados signatarios que aquellos que no han ni firmado, ni adherido a la misma.” Los Estados signatarios pueden formular objeciones a las reservas hechas por otros

Estados, al menos a título provisional: las objeciones se convertirían en definitivas por la ratificación y serían improcedentes en caso de no ratificación (Opinión del 28 de mayo de 1951, sobre las reservas cit.). La firma no implica la participación, salvo estipulación en contrario; de tal manera, "la Convención de Montevideo que no ha sido ratificada por Perú, no podría ser invocada en su contra (Sentencia del 20 de noviembre de 1950, sobre el derecho de asilo).

Sólo la ratificación implica la entrada y puesta en vigor del tratado y la participación de las partes, salvo intención en contrario. De tal manera, un tratado de arbitraje que debía durar diez años, debe aplicarse, según la intención de las partes, no a partir del día de la firma, en 1894, sino a partir del intercambio de ratificaciones, en 1896: la primera solución hubiese dejado 5 días entre la designación del árbitro y el fin de la aplicación del tratado... (Sentencia del 18 de noviembre de 1960, sobre la sentencia arbitral del rey de España).

La ratificación de un tratado ya en vigor entre otros Estados trae consigo por sí sola la participación (Sentencia del 20 de febrero de 1969, sobre la Plataforma Continental).

El registro era un requisito para que un tratado fuese obligatorio, según el Pacto de la Sociedad de Naciones, en su artículo 18, por lo menos para los tratados celebrados posteriormente, entre Estados-miembros (Sentencia del 21 de diciembre de 1962, sobre el sudoeste africano, excepción preliminar).

El alcance respecto a terceros. Fuera de la participación, una norma convencional puede tener ciertos efectos frente a terceros:

1. Un tratado que contenga la cláusula de la nación más favorecida puede conferir a un Estado el goce de derechos que otro tratado firmado con un Estado tercero reconoce a éste. El tratado que contiene la cláusula establece él solo los derechos y es el único que debe ser invocado. "Un tratado con un Estado tercero independiente y aisladamente del tratado de base no puede producir ningún efecto jurídico" es *res inter alios acta* (Sentencia del 22 de julio de 1952, sobre la Anglo Iranian Oil Company, excepción preliminar).
2. La aceptación implícita de un régimen convencional puede admitirse en la medida en que el comportamiento del Estado sea claro y constante y haya llevado a otros Estados a modificar su posición en detrimento de sí mismos: es la aplicación del estoppel (Sentencia del 20 de febrero de 1969, sobre Plataforma Continental).
3. Una disposición convencional puede "consagrar o cristalizar una regla consuetudinaria preexistente o en vía de formación". Esta norma es entonces obligatoria más allá de los participantes, pero a

título de regla consuetudinaria (Sentencia del 20 de febrero de 1969, sobre Plataforma Continental).

El final de las convenciones. La extinción de una norma convencional puede ser la consecuencia de su violación sustancial, particularmente de la violación de una disposición esencial para la realización del objeto y del fin del tratado. Así, la caducidad del mandato es la consecuencia de la violación por el mandatario de sus obligaciones. Es éste un principio general de derecho internacional (Opinión consultiva, del 21 de junio de 1971, sobre el caso de Namibia).

La interpretación de las convenciones

La corte afirma la existencia de "principios de derecho internacional relativos a la interpretación de la intención de las partes en las convenciones multilaterales" (Opinión del 28 de mayo de 1951, sobre las reservas, cit.). De una manera general, sigue ciertas directrices en la interpretación de todas las convenciones.

El texto. La Corte se atiene primeramente al "sentido natural y ordinario de las palabras". "El primer deber de un tribunal que tiene que interpretar y aplicar las disposiciones de un tratado es el de esforzarse por dar efecto según su sentido natural y ordinario a estas disposiciones tomadas en su contexto" (Opiniones del 3 de marzo de 1950, sobre competencia para la admisión de un Estado en las Naciones Unidas; del 18 de julio de 1951, sobre interpretación de tratados; de 28 de mayo de 1951, sobre reservas). Así, en el artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas relativo a la admisión, el sentido natural y ordinario de las palabras lleva a la conclusión de que las condiciones de admisión no son limitativas; el texto francés y el texto inglés tienen el mismo sentido y no pueden oponerse el uno al otro; son claros y eliminan todo recurso a los trabajos preparatorios (Opinión del 28 de mayo de 1948, sobre condiciones de admisión cit.). Y si las palabras de un artículo de la convención sobre la Organización Marítima Consultiva Intergubernamental se leen con su sentido natural y ordinario, queda claro que dan el control del Comité de Seguridad Marítima a ciertas potencias (Opinión del 8 de junio de 1960, sobre la composición del Comité de Seguridad Marítima de la OMCI).

Pero la interpretación no puede siempre contentarse del sentido natural y ordinario de las palabras. Así sucede "si las palabras pertinentes, cuando se les atribuye su sentido natural y ordinario, son equívocas o conducen a resultados no razonables" (Opiniones del 3 de marzo de 1950, sobre competencia de la Asamblea General para la admisión de un Estado; y del 28 de mayo de 1951, sobre reservas a la convención sobre el delito de genocidio), o llevan a un resultado incompatible con el espí-

ritu, la letra o el objeto de la convención (Opinión del 21 de diciembre de 1962, sobre el sudoeste africano).

Lo mismo sucede en caso de silencio del texto. Este silencio puede denotar una laguna del derecho: “el silencio de la convención (sobre asilo) implica que se ha querido dejar el arreglo de las consecuencias de esta situación a decisiones inspiradas por consideraciones de conveniencia o de oportunidad política” (Sentencia del 13 de junio de 1951, sobre el caso de Haya de la Torre). Es a menudo permisivo: no implica ni la prohibición de formular reservas a la convención (Opinión del 28 de mayo de 1951, sobre reservas), ni la obligación de entregar a un refugiado (Sentencia del 13 de junio de 1951, sobre Haya de la Torre).

La intención. A falta de texto claro, la Corte busca la intención de las partes “a la luz de las características de la convención”: considera y toma en cuenta “sus disposiciones, su modo de preparación y de adopción”.

Ella se ocupa primeramente de “la economía del texto”. Interpreta el artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, sobre los poderes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General en materia de admisión, en función de la economía general de la Carta (Opinión del 3 de marzo de 1950, sobre competencias para la admisión); sobreentiende ciertas calificaciones que derivan del conjunto de la Carta (Opinión del 20 de julio de 1962, sobre ciertos gastos de las Naciones Unidas).

Se refiere particularmente a las funciones generales de la Organización de las Naciones Unidas para deducir de las mismas, ciertas competencias implícitas de ésta. “En Derecho Internacional se debe juzgar que la Organización tiene los poderes que, aunque no expresamente atribuidos por la Carta, le son conferidos por implicación necesaria como esenciales para el cumplimiento de sus deberes.” Por ejemplo, el de presentar una reclamación internacional o ejercer la protección funcional de sus agentes (Opinión del 11 de abril de 1949, sobre reparación de daños, sufridos al servicio de las Naciones Unidas, ver *infra*).

La Corte se refiere a las concepciones que las partes en el tratado han podido tener en mente... Se ocupa, pues, de “las disposiciones de la Carta interpretadas a la luz de los principios del Derecho Internacional” (Opinión del 11 de abril de 1949, sobre reparación de daños); se funda en que “los principios subyacentes (en la convención) en este caso, sobre el delito de genocidio, cit., son reconocidos como obligatorios por los países civilizados aun sin obligación convencional”. (Opinión del 28 de mayo de 1951, sobre reservas); ella dice que los redactores de la convención sobre la OMCI no han podido tener en mente sino un único criterio de tonelaje (Sentencia del 8 de junio de 1960, sobre la composición del Comité de Seguridad Marítima).

De la misma manera, la Corte plantea que “todo instrumento internacional debe ser interpretado en el marco del sistema jurídico en vigor,

en el momento en que la interpretación tiene lugar" (Opinión del 21 de junio de 1971, sobre Namibia); de esta manera, la Corte estima necesario, a propósito de un tratado antiguo, "tener en cuenta el sentido del término 'controversia o diferencia' en la época en que los tratados fueron celebrados" (Sentencia del 27 de agosto de 1952, sobre los ciudadanos norteamericanos en Marruecos).

La Corte busca igualmente la finalidad de las partes: constata, por ejemplo, que éstas preferían obtener el máximo de participantes más que lograr el máximo de integridad para su convención (Opinión del 28 de mayo de 1951, sobre reservas a la Convención sobre el delito de genocidio).

Finalmente se refiere a menudo al efecto útil del tratado, juzgado como más conforme a la voluntad de las partes. Recibe un procedimiento de opinión porque ésta, lejos de eliminar la aplicación de otro procedimiento de arreglo, favorece su aplicación al informar a la Asamblea General sobre la posibilidad de ejecución. (Opinión del 3 de marzo de 1950, sobre interpretación de los Tratados de Paz con Bulgaria, Hungría y Rumania). Pero la Corte pone ciertos límites a este principio: "El principio de interpretación expresado por la máxima *Ut res magis valeat quam pereat*, principio a menudo designado bajo el nombre de principio del efecto útil, no podría autorizar a la Corte a entender la cláusula... en un sentido que... contradijese su letra y su espíritu... La Corte está llamada a interpretar los tratados, no a revisarlos" (Opinión del 18 de julio de 1950, sobre interpretación de los Tratados de Paz cit., segunda fase). Y ella plantea que un texto debe en principio ser interpretado como produciendo efectos conformes y no contrarios al derecho existente (Sentencia del 26 de noviembre de 1957, sobre el derecho de paso, excepción preliminar).

En esta búsqueda de la intención de las partes, la Corte examina su actitud en la preparación y en la aplicación de la convención.

Se ocupa, primeramente, de los trabajos preparatorios: estudia el comentario del proyecto elaborado por la secretaría, la discusión del texto en comisión o en sesión plenaria, para deducir de todo ello, si no el entendimiento entre las partes, por lo menos la opinión en el seno del órgano de elaboración (Opinión del 28 de mayo de 1951, sobre reservas); estudia las redacciones sucesivas del artículo para captar el sentido del mismo (Opinión del 8 de junio de 1960, sobre la composición del Comité de la Seguridad Marítima).

Además, la Corte se ocupa de la actitud de los Estados en la aplicación del tratado. Así, para la búsqueda del criterio del tonelaje de las grandes potencias marítimas, se funda en la práctica actual de los Estados (Opinión del 8 de junio de 1960, antes citada); para la interpretación del artículo 4 de la Carta de la ONU, invoca la interpretación constante de los órganos encargados de aplicarla (Opinión del 3 de marzo

de 1950, sobre competencias para la admisión). Con mayor razón, se funda sobre la actitud del Estado más interesado: "La interpretación de instrumentos jurídicos dada por las partes mismas, si no es concluyente para determinar su sentido, posee, sin embargo, un gran valor probatorio cuando esta interpretación contiene el reconocimiento por una de las partes de sus obligaciones en virtud de este instrumento"; de esta manera, las declaraciones de la Unión Sudafricana fueron juzgadas como constituyendo "el reconocimiento de la continuación de sus obligaciones en virtud del mandato y no una simple indicación en cuanto a la conducta futura de su gobierno" (Opinión del 11 de julio de 1950, sobre el Estatuto del sudoeste africano, hoy Namibia).

Las reservas a las convenciones

La Corte autoriza a las partes a expresar ciertas reservas a las convenciones multilaterales en el momento de su firma, ratificación o adhesión; pero define estrictamente a qué condiciones y a qué Estados serán oponibles dichas reservas (Opinión del 28 de mayo de 1951, sobre reservas).

Las condiciones de las reservas. La Corte deduce el principio del consensualismo, las condiciones de oponibilidad y hasta de validez de las reservas.

Las reservas deben ser aceptadas por las partes. "Un Estado no puede, en sus relaciones convencionales, estar ligado sin su consentimiento y, en consecuencia, ninguna reserva le es oponible en tanto que no haya dado su asentimiento... Toda convención multilateral es el fruto de un acuerdo libremente celebrado sobre las cláusulas y, en consecuencia, no puede corresponder a ninguno de los contratantes destruir o comprometer por decisiones unilaterales lo que es el fin y la razón de ser de la convención. Es a este principio que se refería la noción de la integridad de la convención tal como fue adoptada, noción que en su acepción tradicional lleva a no considerar una reserva como válida salvo que haya sido aceptada por todos los contratantes sin excepciones y que hubiese sido expresada en el curso mismo de la negociación." Pero la Corte admite que este principio pueda ser atemperado en las convenciones multilaterales en razón de ciertas circunstancias, tales como el carácter universal de la ONU, la participación muy amplia en la convención, la frecuencia de las reservas, etcétera.

Las reservas deben ser autorizadas por el tratado, en todo o en parte, caso de la Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental (Sentencia del 20 de febrero de 1969, sobre Plataforma Continental), de manera explícita o implícita. "Ciertamente que no se podría deducir de la ausencia, en una convención, de una disposición relativa a las reservas, la prohibición para los Estados de introducir reservas a la misma... Se puede tomar en consideración el carácter de una convención multilate-

ral, su objeto, sus disposiciones, su modo de elaboración y de adopción para apreciar, en el silencio de la convención, la posibilidad de formular reservas así como la posibilidad de apreciar la regularidad y los efectos de las mismas." De tal manera, el hecho de que la convención sobre el genocidio no haya sido votada por unanimidad, muestra que las partes están de acuerdo en el derecho de formular reservas.

Las reservas deben ser, por último, compatibles con el objeto y el fin de la convención. Así, el origen y el objeto de la convención sobre genocidio muestran que los principios subyacentes en la misma son reconocidos por las naciones civilizadas como obligatorios, aun en ausencia de convención, que la convención está destinada a una aplicación universal, y que las partes tienen un interés común en realizar los fines de la convención; la Asamblea General y las partes desean la participación del máximo de Estados sin sacrificar el objeto de la convención; en consecuencia, "un Estado que ha presentado y mantenido una reserva, materia de objeciones por parte de una o de varias partes en la convención pero no de las demás, puede ser considerado como parte en la convención si la reserva es compatible con el objeto y el fin de la convención, sin lo cual este Estado no puede ser considerado como parte en la misma".

Se excluyen las reservas "en el caso de reglas o de obligaciones de derecho general o consuetudinario que deban aplicarse en condiciones iguales a todos" (Sentencia del 20 de febrero de 1969, sobre Plataforma Continental).

El alcance de las reservas. Queda por determinar a quién pueden ser oponibles las reservas que llenen las condiciones requeridas.

Las partes en la convención tienen una gran libertad de apreciación. Pueden considerar a la reserva como incompatible con el objeto y el fin de la convención, objetarla y considerarla a su autor como no parte en la convención. Pueden juzgar la reserva compatible con el objeto y el fin de la convención y considerar que su autor es parte en la convención. El problema sólo afecta las relaciones entre los dos Estados; si concierne a varios Estados, la controversia puede ser sometida a arreglo pacífico.

Los Estados que han firmado pero no han ratificado la convención pueden hacer objeciones a título provisional; dichas objeciones hacen, desde luego, conocer la actitud del Estado; convirtiéndose en definitivas por la ratificación y dejando de tener razón de ser en caso de no ratificación.

Pero un Estado que tiene un título o un derecho a firmar o a adherirse y no lo ha hecho aún, no tiene ningún título o derecho convencional a presentar sus objeciones.

1.2. *La costumbre.* El artículo 38 del Estatuto cita como segunda fuente de derecho a "la costumbre internacional como prueba de una práctica

generalmente aceptada como derecho". La Corte desarrolla la elaboración y el alcance de esta costumbre.

La elaboración de la costumbre

La costumbre nace de una práctica aceptada como derecho.

La Corte supone "que la regla de la que alguien se prevale es conforme a un uso constante y uniforme, practicado por los Estados en cuestión, y que traduce un derecho o un deber" (Sentencia del 20 de noviembre de 1950, sobre el derecho de asilo) o "que, después de un lapso de tiempo por breve que sea, la práctica de los Estados, incluyendo aquellos que están particularmente interesados, haya sido frecuente y prácticamente uniforme en el sentido de la disposición invocada, y se haya manifestado de manera que establezca un reconocimiento general del hecho de que una regla de derecho o una obligación jurídica están en juego". "Los Estados interesados deben tener el sentimiento de conformarse a lo que equivale a una obligación jurídica" y no "a simples consideraciones de cortesía, de oportunidad o de tradición" (Sentencia del 20 de febrero de 1969, sobre la Plataforma Continental).

La Corte debe, pues, apreciar la práctica para el efecto de establecer la costumbre.

A propósito de una pretendida costumbre latinoamericana que permite calificar unilateralmente un delito para fines del asilo, la Corte revisa los tratados relativos a la materia y celebrados por un cierto número de Estados latinoamericanos, incluso los interesados en el caso. La Corte toma nota de los precedentes en los cuales el asilo ha sido otorgado a personas no habiendo sido objeto de ninguna acusación por los tribunales judiciales y ello, por razones de conveniencia y de oportunidad política, no por un sentimiento de obligación jurídica.

La Corte explica ampliamente, más adelante, los elementos de la costumbre. "La parte que invoca una costumbre de esta naturaleza debe probar que se constituyó de tal manera que es obligatoria para la otra parte . . . , que la regla de la que se prevale es conforme a un uso constante y uniforme, practicado por los Estados en cuestión, y que este uso traduce un derecho que pertenece al Estado otorgante del asilo y un deber que incumbe al Estado territorial."

La Corte concluye que no está establecido que la regla pretendida haya sido considerada como un derecho de los Estados que otorgan el asilo y respetada como un deber de los Estados territoriales; que de los hechos se hacen derivar demasiadas incertidumbres y contradicciones para implicar una costumbre constante, uniforme, aceptada como una regla de derecho (Sentencia del 20 de noviembre de 1950, sobre el derecho de asilo).

A propósito de una pretendida regla de equidistancia en la delimita-

ción de la plataforma continental, el juez toma en consideración las proclamaciones de los gobiernos y los trabajos de las comisiones (especialmente de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU) y concluye que, lejos de derivar de un principio inherente, es la racionalización *a posteriori* de soluciones juzgadas como oportunas (Sentencia del 20 de febrero de 1969, sobre la Plataforma Continental).

Esta costumbre está a veces vinculada a una convención.

Una regla consuetudinaria puede haber nacido de una convención y ser reconocida por la práctica. Eso supone una participación suficientemente amplia y representativa, una práctica suficientemente frecuente y uniforme y una *opinio juris* entre los Estados terceros (Sentencia del 20 de febrero de 1969, sobre la Plataforma Continental).

A la inversa, "un derecho consuetudinario en vías de formación" puede ser cristalizado por una convención. Vinculará de este modo a los Estados a título de regla consuetudinaria hasta la ratificación de dicha convención (Sentencia del 20 de febrero de 1969, citada anteriormente).

A *fortiori*, una costumbre puede ser codificada. Puede aplicarse a título de costumbre hasta la ratificación; como es el caso de la regla clásica sobre la extinción de los tratados (Opinión consultiva del 21 de junio de 1971, sobre Namibia).

El alcance de la costumbre

La costumbre puede tener una extensión variable.

Puede ser bilateral. Mientras que una parte sostenía que ninguna costumbre local puede establecerse entre dos Estados, la Corte afirma que una costumbre puede constituirse entre un número de Estados igual o superior a dos; declara encontrarse precisamente en presencia de una práctica aceptada por los dos Estados y niega colocarse en el plano de la costumbre internacional o de los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. "Cuando una práctica está claramente establecida entre dos Estados y es aceptada como la norma que gobierna sus relaciones, la Corte debe atribuir un efecto decisivo a esta práctica a efecto de determinar los derechos y las obligaciones de los Estados interesados; tal práctica particular tiene mayor importancia que cualquiera otra regla general" (Sentencia del 12 de abril de 1960, sobre el derecho de paso).

Puede ser original. Una de las partes invocaba, a propósito del derecho a calificar unilateralmente un delito para los fines del asilo, "el derecho internacional americano en general", y la Corte traduce: "una costumbre regional o local particular a los Estados latinoamericanos". La Corte busca esta costumbre latinoamericana en los tratados que afectan a un número suficiente de Estados y en los precedentes que les conciernen (Sentencia del 20 de noviembre de 1950, sobre el derecho de asilo).

La costumbre puede finalmente ser general. La Corte analiza la "capacidad de recurrir a los métodos consuetudinarios reconocidos por el derecho internacional para el establecimiento de las reclamaciones" (Opinión del 11 de abril de 1949, sobre reparación de daños); considera como "generalmente admitido y conforme a la costumbre internacional el que los Estados en tiempos de paz poseen el derecho de hacer pasar sus navíos de guerra por los estrechos" (Sentencia del 9 de abril de 1949, sobre el Estrecho de Corfú); busca en la práctica y la jurisprudencia de los Estados, si es una regla de derecho internacional el que la longitud de las líneas en materia de delimitación marítima no deba exceder de diez millas (Sentencia del 18 de diciembre de 1951, sobre el caso anglo-noruego de las pesquerías). A esas costumbres se aproximan los principios generales de derecho.

1.3 *Los principios generales de derecho.* El artículo 38 del Estatuto de la Corte considera en tercer lugar "los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas". Esos principios son fundamentales y no escritos; han sido tomados a los derechos internos o son propios del derecho internacional.

Los principios generales de derecho de origen interno

Los principios generales pueden derivar del derecho interno de todas las naciones civilizadas si se les juzga susceptibles de adaptarse a las circunstancias de derecho internacional.

Así, "los modos de pruebas indirectos son admitidos en todos los sistemas del derecho y su uso está sancionado por la jurisprudencia internacional" (Sentencia del 9 de abril de 1949, sobre el Estrecho de Corfú); los principios subyacentes de la Convención sobre el genocidio son reconocidos por todas las naciones civilizadas aun sin estipulación convencional y hacen imposible toda reserva sobre este punto (Opinión del 28 de mayo de 1951, sobre reservas); el principio de la autoridad de la cosa juzgada (Opinión del 13 de julio de 1954, sobre el efecto de los fallos del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas).

A veces el juez debe apelar al derecho interno. "No existen en derecho internacional instituciones correspondientes a las que la Corte pudiese apelar. Es por lo que no solamente dicha Corte debe tomar en consideración el derecho interno, sino que debe referirse a él. Son a las reglas generalmente aceptadas por los sistemas de derecho interno que reconocen la sociedad anónima, y no al derecho interno de un Estado determinado, a las que el derecho internacional se refiere. Cuando apela a dichas reglas, la Corte no puede modificarlas y menos aún deformarlas." (Sentencia del 5 de febrero de 1970, sobre la Barcelona Traction, segunda fase.)

En cambio, "el mandato del derecho internacional no tiene en común

sino el nombre con las nociones diversas del mandato en el derecho interno... no es posible sacar una conclusión por analogía con las nociones de mandato en derecho interno o de cualquier otra concepción jurídica de ese derecho" (Opinión del 11 de julio de 1950, sobre el Estatuto del sudoeste africano).

Los principios generales de naturaleza internacional

Los principios generales pueden también derivar de las exigencias especiales del derecho internacional y serle particulares.

La Corte se contenta a veces con citarlos. Ella tiene en cuenta "ciertos principios generales y bien reconocidos tales como las consideraciones elementales de humanidad, más absolutos todavía en tiempos de paz que en tiempos de guerra, el principio de la libertad de las comunicaciones marítimas y la obligación para todo Estado de no dejar utilizar su territorio para la realización de actos contrarios a los derechos de los demás Estados". (Sentencia del 9 de abril de 1949, sobre el Estrecho de Corfú); "el principio bien establecido del derecho internacional... según el cual todo procedimiento judicial con referencia a una cuestión jurídica pendiente exige el consentimiento de las partes" (Opinión del 30 de marzo de 1950, sobre la interpretación de los Tratados de Paz); "los principios del derecho sobre la interpretación de las convenciones multilaterales" (Opinión del 28 de mayo de 1951, sobre reservas); "el principio, aceptado por el derecho internacional en materia de arbitraje, de que el tribunal es dueño de su competencia" (Sentencia del 18 de noviembre de 1953, sobre el caso *Nottebohm*); el "principio de derecho internacional que prevé la cesación de una relación convencional como consecuencia de una violación" (Opinión consultiva del 21 de junio de 1971, sobre Namibia).

La Corte constata a veces que tales principios generales no plantean ninguna regla. Así, "los principios de derecho internacional a los que remite el acuerdo boliviano sobre la extradición de 1911 no conocen ninguna regla de calificación unilateral y definitiva por el Estado que otorga el asilo diplomático" (Sentencia del 20 de noviembre de 1950, sobre el derecho de asilo). No reconocen tampoco ninguna *actio popularis* (Sentencia del 18 de julio de 1966, sobre el sudoeste africano, hoy Namibia, segunda fase).

1.4 *Las fuentes subsidiarias.* El artículo 38 del Estatuto considera finalmente ciertas fuentes auxiliares e independientes de la voluntad de los Estados.

Las decisiones judiciales o la jurisprudencia

El artículo 38 cita las "decisiones judiciales". La jurisprudencia inclu-

ye primeramente el conjunto de las jurisprudencias nacionales sobre cuestiones de derecho internacional. Incluye también, la "práctica arbitral" (Opinión del 18 de julio de 1950, sobre interpretación de los Tratados de Paz) o la "jurisprudencia arbitral" (Sentencia del 5 de febrero de 1970, sobre la Barcelona Traction, segunda fase). Incluye, sobre todo, la jurisprudencia de la Corte Mundial.

La Corte Internacional de Justicia se apoya en soluciones de la Corte Permanente para construir la regla de la competencia internacional de la ONU (Opinión del 11 de abril de 1949, sobre reparación de daños); invoca "el principio fundamental enunciado en la opinión número 11 emitida por la Corte Permanente sobre el servicio postal polaco" (Opinión del 18 de julio de 1950, sobre interpretación de los Tratados de Paz). Invoca y cita frecuentemente sus propias sentencias y opiniones en apoyo de sus razonamientos: por ejemplo, la sentencia sobre la Barcelona Traction (segunda fase) cita ocho sentencias u opiniones, y la opinión sobre Namibia es una recopilación de citas.

Pero la jurisprudencia no constituye una regla de derecho, obligatoria para el juez. En virtud del artículo 59 del Estatuto, "la decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido"; y de manera más general ningún precedente tiene carácter obligatorio. La Corte podría muy bien realizar un viraje en su propia jurisprudencia.

De hecho, la Corte intenta conciliar el respeto de sus posiciones anteriores y la adaptación necesaria a las situaciones nuevas, por una interpretación dinámica de sus decisiones, sentencias u opiniones anteriores. Reconoce que se ha negado a responder a una petición de opinión en el asunto de Carelia Oriental, pero que las circunstancias en este asunto son diferentes y la autorizan y hasta la obligan a responder (Opinión del 30 de marzo de 1950, sobre interpretación de los Tratados de Paz). Reconoce que no ha aplicado el artículo 36 inciso 5, del Estatuto a Bulgaria en su decisión del 26 de mayo de 1959 (incidente aéreo del 27 de julio de 1955); pero que esta solución no tiene valor obligatorio sino entre las partes y, sobre todo, no podría valer para Tailandia que se encuentra en condiciones muy diferentes (Sentencia del 25 de mayo de 1961, sobre el T'emplo de Preah Vihear). La Corte ha podido variar sus posiciones de una consulta a la otra a propósito del derecho de asilo o del sudoeste africano.

La doctrina

El artículo 38 cita igualmente "las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones".

La doctrina constituye una fuente preciosa, pero subsidiaria del derecho internacional. La doctrina es considerada, según este artículo, como

un medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Y así, la Corte funda su concepción de la nacionalidad, entre fuentes, en la "opinión de los autores" (Sentencia del 6 de abril de 1955, en el caso *Nottebohm*; Opinión del 21 de junio de 1971 en el caso de Namibia).

La equidad

El artículo 38, inciso 2, permite a la Corte "si las partes así lo convienen, decidir un litigio *ex aequo et bono*".

La Corte puede así ejercer ciertos poderes de apreciación, particularmente en materia de reparación (Sentencia del 15 de noviembre de 1949, sobre el Estrecho de Corfú; Opinión del 23 de octubre de 1956, sobre los fallos del Tribunal Administrativo de la OIT); pero puede también considerar ciertas reglas de equidad bajo el ángulo del derecho. "No se trata de aplicar la equidad simplemente como una representación de la justicia abstracta, sino de aplicar una regla de derecho que prescribe el recurso a principios de equidad de conformidad a las ideas que han siempre inspirado el desenvolvimiento del régimen jurídico..." Es sobre esta base que la Corte formula las reglas que deben guiar la determinación de la Plataforma Continental, y particularmente la obligación de aplicar "principios de equidad" (Sentencia del 20 de febrero de 1969, sobre la Plataforma Continental). Fundada sin duda, en las mismas consideraciones, busca en toda equidad el derecho del Estado nacional de los asociados a ejercer la protección diplomática (Sentencia del 5 de febrero de 1970, sobre la *Barcelona Traction*, segunda fase).

El derecho natural

Las reglas de derecho natural han llegado a ser evocadas por una decisión judicial.

El principio en discusión "deriva de lo que se podría llamar el derecho natural de la Plataforma Continental, en el sentido de que sería una expresión necesaria de la doctrina establecida, según la cual, la Plataforma Continental depende exclusivamente del Estado ribereño vecino y tendría, por esta razón, *a priori*, un carácter en cierta forma ineluctable en el plano jurídico". Sería "un principio inherente a la concepción fundamental del régimen jurídico de la Plataforma Continental".

Pero ese principio "debería también constituir la regla aplicable según los criterios del derecho positivo". En este caso, no es ni "lógicamente necesario", ni reconocido; no es más que una racionalización de una regla propuesta por las partes (Sentencia del 20 de febrero de 1969, sobre la Plataforma Continental).

La moral

La moral es igualmente descartada por la Corte. "La Corte no puede

tener en cuenta principios morales más que en la medida en que les haya dado una forma jurídica suficiente"; así, el principio de la misión sagrada de civilización asignada al mandatario no tiene otras consecuencias jurídicas que las previstas por disposiciones expresas (Sentencia del 18 de julio de 1966, sobre el sudocste africano, segunda fase).

1.5 *Los actos unilaterales*. El artículo 38 no cita el acto unilateral entre las fuentes del derecho internacional, pero la jurisprudencia de la Corte hace la mención de varios, ya sea de origen interno o de naturaleza diplomática.

Los actos unilaterales de origen interno

Los actos válidos en el plano nacional no tienen en principio efectos internacionales. Sin embargo, ciertos actos tienen una importancia que sobrepasa el marco del Estado, particularmente si definen sus elementos mismos, y tienden a un efecto en el plano internacional. Interesan doblemente al derecho internacional, porque deben ser conformes a ese derecho, y porque contribuyen a sus fuentes.

Así, la delimitación de las aguas territoriales se efectúa unilateralmente por el Estado ribereño, pero debe conformarse al derecho internacional del mar. La delimitación efectuada por Noruega en 1935 no era sino una adaptación de un sistema de delimitación aplicado desde hacía 60 años de manera constante e ininterrumpida y aceptado por los demás Estados y, particularmente, por la Gran Bretaña; no podía pues ser considerado como algo que contraviniese el derecho internacional; muy por el contrario, le ha permitido evolucionar (Sentencia del 18 de diciembre de 1951, sobre el asunto anglo-noruego de las pesquerías).

De la misma manera, el reconocimiento de la nacionalidad es problema de cada Estado, pero debe ser conforme al derecho internacional para tener efectos en el plano internacional y fundar el ejercicio de la protección diplomática. La atribución de la nacionalidad debe apoyarse en la idea que se tiene de ella en el derecho internacional y tomar particularmente en consideración la nacionalidad efectiva (Sentencia del 6 de abril de 1955, caso Nottebohm).

Los actos unilaterales de naturaleza internacional

Ciertos actos unilaterales tienen, por naturaleza, un alcance internacional: las reservas a un tratado, las declaraciones de aceptación de la competencia obligatoria, y las reservas que las acompañan, los reconocimientos, etcétera.

Esos actos están sometidos a ciertas condiciones de validez internacional.

El consentimiento debe estar exento de error y de coacción. La Corte cita la regla de que el error no constituye un vicio del consentimiento

salvo que la parte que se prevale de él no haya contribuido por su propia conducta a evitar el error o no haya podido evitarlo; niega tomar en consideración el error cometido por Tailandia en el reconocimiento tácito de su frontera con Comboya (Sentencia del 26 de mayo de 1961, y de 15 de junio de 1962, sobre el Templo de Preah Vihear).

El objeto del acto puede ser reglamentado y controlado. Las reservas a un tratado deben ser compatibles con su objeto y con su fin (Opinión del 28 de mayo de 1951, sobre reservas). Las reservas a una declaración de aceptación deben ser compatibles con la aceptación de la competencia obligatoria y con la disposición facultativa del artículo 36 del Estatuto. La nulidad de una reserva invalida toda la declaración si la reserva es el elemento esencial y si no, la parte de la declaración que está vinculada a ella. Esta nulidad no puede ser invocada por el autor de la declaración para oponerse a una demanda, si no está planteada por la otra parte. Puede ser invocada por la otra parte y deberá ser juzgada por la Corte (Sentencia del 26 de noviembre de 1957, sobre el derecho de paso). Puede no ser invocada por ninguna de las partes y no afectar la competencia (Sentencia del 6 de julio de 1957, sobre el asunto relativo a ciertos préstamos noruegos).

La competencia y la forma pueden ser reglamentados. La declaración de aceptación de la competencia obligatoria es un acto gubernamental expreso. Pero la aceptación de la competencia de la Corte para un asunto puede ser implícita y resultar del hecho de la comparecencia; el reconocimiento de una situación puede resultar de la ausencia de protesta ante una delimitación (Sentencia del 18 de diciembre de 1951, sobre las pesquerías; del 15 de diciembre de 1962, sobre el Templo de Preah Vihear); debe emanar de autoridades nacionales y no locales (véase la Sentencia del 15 de diciembre de 1962, antes citada).

Si son expresos esos actos, están sometidos a ciertos principios de interpretación. Son, en general, los mismos que para las convenciones. La Corte se refiere a "la manera razonable y natural de leer el texto "de acuerdo con la intención del autor. Busca esta intención en los sucesos acaecidos en esta fecha; constata que el Irán ha denunciado ciertos tratados de capitulaciones y dice "admitir razonablemente que cuando el gobierno de Irán se disponía a aceptar la competencia obligatoria de la Corte, pretendía excluir de esta competencia todas las controversias que podían relacionarse con la aplicación de las convenciones sobre capitulaciones; la declaración fue redactada con base en esta interpretación". Sin embargo, aparecen principios específicos: así, la Corte se refiere a una ley irania para aclarar la actitud del Irán. La Corte admite, puesto que "el texto de la declaración no es un texto contractual que resulta de negociaciones entre dos o varios Estados" que el principio de que "un texto jurídico debe ser interpretado de manera que una razón de ser y un sentido puedan darse a cada uno de sus motivos"

puede descartarse que una redacción unilateral puede “haber insertado *ex abundanti cautela* motivos que pueden parecer superfluos” (Sentencia del 22 de julio de 1952, sobre la Anglo Iranian Oil Company). La Corte busca, por otra parte, si una carta que acepta la competencia de la Corte puede establecer un precedente para el futuro (Sentencia del 25 de marzo de 1948, sobre el Estrecho de Corfú).

2. *La reglamentación de las relaciones entre Estados.* La jurisprudencia se ocupa, por otra parte, del fondo del derecho, de la reglamentación de las relaciones entre Estados. Prevé sus derechos y deberes recíprocos y el arreglo de sus controversias.

2.1 *Los derechos y los deberes recíprocos de los Estados*

“Un Estado posee, en su totalidad, los derechos y los deberes internacionales reconocidos por el derecho internacional” (Opinión del 11 de abril de 1949, sobre reparación de daños). ¿Cuáles son esos derechos y esos deberes?

Los derechos de los Estados

Los derechos del Estado son, primeramente, las competencias que ejerce respecto a su territorio y a sus nacionales, y que ya fueron tratados (ver *supra*); son también las prerrogativas de que goza frente a otros Estados, igualdad, libertad, derecho a la acción en ciertos casos, etcétera.

Los Estados tienen una situación de igualdad en el ejercicio de sus competencias. Por ejemplo, el Estado que otorga el asilo no puede calificar el delito de manera unilateral, definitiva, obligatoria, porque eso implicaría “una derogación al principio de la igualdad soberana de los Estados” (Sentencia del 20 de noviembre de 1950, sobre el derecho de asilo). Pero es cierto, por otra parte, que ciertos Estados están sometidos a regímenes desiguales, tales como el protectorado o las capitulaciones (Sentencia del 27 de agosto de 1952, sobre los ciudadanos norteamericanos en Marruecos). Pero el Estado puede denunciar los tratados desiguales y reemplazarlos por nuevos tratados fundados en el principio de la igualdad; la interpretación de sus tratados será entonces restrictiva (Sentencia del 22 de julio de 1952, sobre la Anglo Iranian Oil Company).

Los Estados tienen, por otra parte, una gran libertad en el ejercicio de sus competencias. Como ejemplo, son libres de comprometerse. El Estado es libre de negociar o de celebrar cualquier tratado: una potencia mandataria tiene toda la libertad de negociar y de celebrar o no un acuerdo de tutela que reemplace al mandato (Opinión del 11 de julio de 1950, sobre el Estatuto del sudoeste africano).

El Estado es libre desde el momento en que no se ha comprometido:

un signatario de la Convención de La Habana sobre la extradición no está obligado, en ausencia de una disposición en este sentido, de entregar a un refugiado a su país de origen (Sentencia del 13 de junio de 1951, caso Haya de la Torre).

Los Estados son libres de apreciar las situaciones que les conciernen. El Estado que otorga el asilo califica el delito para los fines del mismo, pero el Estado de origen lo califica también libremente (Sentencia del 20 de noviembre de 1950, sobre el derecho de asilo). Cada signatario de una convención, aprecia por sí mismo la regularidad de las reservas (Opinión del 28 de mayo de 1951, sobre reservas).

A dichas libertades se agregan ciertos derechos positivos. Unos son derechos ordinarios, tales como el derecho de paso para sus funcionarios entre dos parcelas de territorio nacional, o el derecho de paso para navíos de guerra en un estrecho internacional (ver *supra*).

La Corte admite que un derecho como el derecho de paso no es demasiado vago o contradictorio para justificar su intervención, y que un derecho cuya apreciación es delicada puede ser objeto de un reconocimiento judicial (Sentencia del 12 de abril de 1960, sobre el derecho de paso).

Otros derechos están destinados a hacer valer las libertades y los derechos de los Estados. El Estado posee así la personalidad jurídica internacional y sus consecuencias, el derecho de presentar una reclamación internacional y de ejercer la protección diplomática de sus nacionales (Opinión del 11 de abril de 1949, sobre reparación de daños).

El Estado posee un derecho de autoprotección y hasta de intervención, si es necesario por la fuerza; pero esos derechos no bastan para darle a un país el derecho de proceder a operaciones de desmantelamiento de minas en las aguas territoriales de otro Estado (Sentencia del 9 de abril de 1949, sobre el Estrecho de Corfú).

Por último otros derechos ¿estarán destinados a hacer valer intereses y derechos colectivos? Los Estados tienen el derecho de participar en los mecanismos institucionales de las organizaciones internacionales; pero no tienen el de obrar individualmente para obtener la ejecución de las obligaciones de los mandatarios o de los demás miembros de la organización; de manera más general, se puede decir que no existe "una especie de *actio popularis*, o un derecho para cada miembro de una colectividad de intentar una acción para la defensa de un interés público" (Sentencia del 18 de julio de 1966, sobre el sudoeste africano, segunda fase).

Las obligaciones de los Estados

A esos derechos de los Estados corresponden ciertas obligaciones.

Las obligaciones jurídicas son definidas, expresamente, por convención o por compromiso unilateral e implícitamente en el marco de una costumbre o de los principios generales del derecho.

La Corte hace de lado las obligaciones simplemente morales y políticas. “La Corte no podría deducir (de la Carta de las Naciones Unidas una obligación jurídica para los Estados mandatarios de celebrar o negociar acuerdos [de tutela]). No le corresponde a la Corte pronunciarse sobre los deberes políticos y morales que estas consideraciones pueden acarrear. La Corte estima que la Carta no impone a la Unión Sudafricana la obligación de colocar al sudoeste africano bajo el régimen de tutela” (Opinión del 11 de julio de 1950, sobre el Estatuto Internacional del sudoeste africano).

Esas obligaciones pueden ser de dos tipos. “Las obligaciones de los Estados hacia la comunidad internacional” conciernen a todos los Estados, operan *erga omnes*, pueden ser invocadas por todos. Conciernen particularmente a la protección de la persona humana: resultan del derecho internacional general y de las convenciones universales. Y “las obligaciones que nacen respecto a otro Estado” que no pueden ser invocadas más que por él (Sentencia del 5 de febrero de 1970, sobre la Barcelona Traction, segunda fase).

Se incurre en responsabilidad por el Estado en caso de faltar a sus obligaciones. Incurre en responsabilidad contractual en caso de violación a una obligación convencional; la negativa por parte de un Estado de cumplir con una obligación convencional, la de designar sus representantes en una comisión arbitral, es de tal naturaleza que compromete su responsabilidad; pero no al grado de modificar la convención misma (Opinión del 18 de julio de 1950, sobre la interpretación de los Tratados de Paz).

Puede incurrir también en una responsabilidad delictuosa o cuasi delictuosa. En el asunto del Estrecho de Corfú, la Corte marca y pone en relieve las faltas cometidas por Albania, compromete su responsabilidad y establece una indemnización a su cargo (Sentencias del 9 de abril y del 15 de diciembre de 1949); pone de relieve igualmente ciertas faltas de Gran Bretaña. En el asunto del oro monetario, habría apreciado, si hubiese tenido la competencia, la existencia de un delito de Albania respecto a Italia y hubiese pronunciado una reparación (Sentencia del 15 de junio de 1954, sobre dicho caso); la Corte habría podido, en las mismas condiciones, apreciar la conducta de los Estados en diversos asuntos de incidentes aéreos; pero los Estados así implicados no han querido afrontar la jurisdicción internacional (Sentencia del 26 de mayo de 1959, sobre el incidente aéreo del 27 de julio de 1955).

Se ve, pues, el riesgo de este sistema de Estados soberanos. Sus derechos se ejercen libres e igualmente, y se encuentran, sin embargo, a menudo envueltos en conflictos; sus obligaciones son frecuentemente interpretadas y satisfechas en condiciones muy variables; de la oposición de sus pretensiones nace lo que se llama un litigio o una controversia

(Sentencia del 27 de noviembre de 1950, sobre interpretación de la sentencia sobre el derecho de asilo).

2.2 *La solución de las controversias.* La jurisprudencia de la Corte Internacional debe considerar pues los diversos modos de solución de las controversias o conflictos. No hace sino una alusión al estado de guerra técnico existente entre Albania y Grecia (Sentencia del 9 de abril de 1949, sobre el Estrecho de Corfú); sólo se interesa en la solución pacífica y prácticamente sólo en el arreglo arbitral.

Las partes tienen la obligación fundamental de negociar: no solamente de entablar negociaciones, sino de proseguirlas (Sentencia del 20 de febrero de 1969, sobre la Plataforma Continental).

Los Estados son libres de recurrir o no a los modos de solución pacífica de las controversias. El consentimiento de las partes, general o particular, es necesario tanto al arbitraje como a la jurisdicción. Un Estado puede aceptar la jurisdicción para un asunto y reservarse su libertad para el futuro (Sentencia del 25 de marzo de 1948, sobre el Estrecho de Corfú).

Es en función del consentimiento que la Corte considera la arbitrabilidad y el arbitraje.

La Arbitrabilidad

La Corte aprecia primeramente la arbitrabilidad, respecto a los tratados de arbitraje, de los conflictos o controversias y de las reclamaciones.

Verifica, primeramente, la existencia y la calificación de las controversias respecto a los tratados. Por ejemplo, pone de relieve que la correspondencia diplomática intercambiada entre las partes, revela una situación de oposición entre sus puntos de vista. Muestra que esas diferencias se refieren a la ejecución de sus obligaciones convencionales y caen bajo la fórmula de las disposiciones que prevén el arbitraje (Opinión del 30 de marzo de 1950, sobre la interpretación de los Tratados de Paz).

Controla, por otra parte, el fundamento convencional de las reclamaciones. La Corte muestra que un tratado de arbitraje de 1926, no teniendo efecto retroactivo no se aplica a las reclamaciones fundadas en tratados anteriores; pero que una declaración de 1926, que forma parte del tratado, se aplica expresamente "a las reclamaciones fundadas en un tratado de 1886". Esta declaración que expresa la voluntad continua de las partes de someter sus controversias al arbitraje se aplica a las reclamaciones fundadas ya sea antes de 1926, o después de 1926 y da competencia a la Corte para decidir de la arbitrabilidad de una reclamación posterior (Sentencia del 1º de julio de 1952, en el caso *Ambatielos*). Por eso, la Corte define la palabra "fundada en el tratado"; descarta significados extremos, "no extraña al tratado", y "efectivamente fundada en el tratado", oponiendo en suma la idea de "fundamento convencional" a la

idea de "fondo"; la Corte tiene competencia para verificar el fundamento convencional, asegurarse de que los argumentos del demandante son suficientemente plausibles como para permitir concluir que la reclamación está fundada en el tratado; pero solamente el árbitro tiene competencia sobre el fondo para pronunciarse sobre los argumentos respectivos. La Corte puede entonces mostrar que la reclamación en este caso está fundada en el tratado de 1886, al invocar dos cláusulas que figuran en el mismo, la cláusula de la nación más favorecida, que permite al demandante obtener la reconsideración de la denegación de justicia, y la cláusula del "libre acceso a los tribunales de justicia". La sentencia concluye que el demandado está obligado a someterse al arbitraje (Sentencia del 19 de mayo de 1953, caso *Ambiatelos*).

Por último, la Corte puede verificar que la solución por negociaciones directas es imposible, y que ningún otro modo de solución está fijado. Deduciendo de todo lo anterior la obligación del arbitraje (Opinión del 30 de marzo de 1950, sobre la interpretación de los Tratados de Paz).

El arbitraje

La Corte puede entonces controlar diversos aspectos del arbitraje mismo.

Sanciona, primeramente, la obligación de designar el tribunal arbitral, obligación prevista por ciertos tratados. Éstos obligan a cada parte, a petición de la otra, a cooperar en la constitución de la comisión arbitral al designar su representante nacional.

Dichos tratados autorizan al secretario general, si las partes faltan a la obligación de nombrar el tercer miembro, a nombrar él mismo ese tercer miembro; pero no lo autorizan, si una parte no nombra su representante nacional, a nombrarlo en su lugar. La Corte invoca en este sentido "el sentido natural y ordinario de los términos empleados", la práctica arbitral, la interpretación restrictiva de una cláusula que da poder a un tercero, la ausencia de voluntad expresa de las partes en favor de tal solución. Juzga que una comisión de dos miembros de los que uno solo impediría toda decisión en donde se requiere la unanimidad contraviene el tratado; que la falta de un Estado en cumplir con sus obligaciones convencionales puede comprometer su responsabilidad, pero no autorizarlo a violar o a revisar el tratado; que una interpretación que dé efecto útil a una cláusula no podría ir contra su letra y su espíritu; que esta interpretación no puede reemplazar una voluntad que las partes no se han atrevido a expresar. La Corte se niega, por lo tanto, a salirse de su papel judicial y a poner remedio a una carencia del tratado (Opinión del 18 de julio de 1950, sobre la interpretación de los Tratados de Paz).

La Corte controla, en segundo lugar, la validez de la designación de los árbitros respecto al tratado. Así, ella hace notar que el tercer miembro debía ser escogido por los miembros nacionales entre ciertos diplomáticos o ciertas personalidades en segundo término y, a falta de ellos, al gobierno de España o de un país sudamericano; dos personalidades habían sido designadas y luego habían abandonado el país y el rey de España había sido designado; los dos Estados habían aprobado la designación y tomado parte en el procedimiento, sin impugnar la validez de la designación (Sentencia del 18 de noviembre de 1960, sobre el laudo arbitral del rey de España, respecto al conflicto fronterizo entre Honduras y Nicaragua).

La Corte controla, finalmente, la validez del laudo arbitral. Considera que el Estado que manifiesta su aceptación después del laudo y luego realiza actos de reconocimiento no puede cuestionar posteriormente su validez. Aprecia si existe exceso de poder por la inobservancia de las cláusulas del tratado; se niega a reconocer error en la apreciación de las pruebas, apreciación que deriva del poder soberano del árbitro; aprecia la existencia y la suficiencia de los motivos (misma Sentencia del 18 de noviembre de 1960).

Controla, por último, el carácter ejecutorio del laudo. La Corte no se niega a admitir que el laudo sea difícil de ejecutar en el caso de lagunas, oscuridades y contradicciones en el mismo; pero considera que una sentencia o laudo son ejecutorios si sus considerandos y su dispositivo son claros (Sentencia del 18 de noviembre de 1960, sobre el laudo arbitral del rey de España, respecto al conflicto fronterizo entre Honduras y Nicaragua).

III. CONSIDERACIONES FINALES

A guisa de conclusión de este trabajo haremos, por último, algunas consideraciones sobre el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.

1. En lo que a la Corte Internacional de Justicia se refiere, no se puede evaluar la labor realizada por ella en poco más de veinticinco años solamente por medio de un comentario por pormenorizado que sea de los diversos fallos y opiniones consultivas que ha emitido; ese ejercicio no equivaldría con justicia a una evaluación completa.

Si la Corte Permanente de Justicia Internacional, que mencionamos al principio de este trabajo, no fue nunca parte de las Naciones y tuvo indiscutiblemente una estrecha vinculación con ella. A mayor abundamiento, la tiene con la ONU, la Corte Internacional de Justicia, que fue concebida precisamente como un "órgano principal", de esa organización. Su estatuto, forma parte integrante de la Carta de la Organización.

Desde el principio mismo, se concibió y se previó la existencia de la Corte Internacional, no meramente como una corte mundial, sino como parte integrante de la Organización de las Naciones Unidas. Es legítimo suponer que a este efecto se recurrió a la experiencia habida de la relación entre la Corte Permanente y la Sociedad de las Naciones; que la nueva corte internacional habría de ser, mediante provisión expresa y desde el principio, lo que la Corte Permanente, en ausencia de una definición textual, había llegado a ser de hecho, algo vinculado orgánicamente con los trabajos de la organización que le había dado vida. Por otra parte, la propia organización principal de la nueva corte estaba concebida como una estructura más unificada y orgánica: la Carta de la ONU hace hincapié en los propósitos, principios y acción de la organización, lo cual no se encuentra en el Pacto, de suerte que toda la atmósfera de la Carta es la de la constitución de una sociedad organizada más bien que la de un simple tratado para cooperar. El mecanismo ideado y puesto en marcha en 1945 fue así un mecanismo que dependía mucho para su funcionamiento, de la integración de sus partes componentes, y la Corte Internacional de Justicia fue imaginada como un "órgano principal", esto es, como una de las más esenciales de esas partes.

2. La Carta de las Naciones Unidas se propuso que la importancia de la Corte como ayuda para el logro de los objetivos de las Naciones Unidas, adquiriera realidad por los medios específicos. En primer lugar, el derecho y el deber de los Estados-miembros de solucionar aquellas controversias que pudieran ser susceptibles de determinación judicial mediante el recurso a la Corte Internacional, en caso de no haber acuerdo para resolverlas por otros medios pacíficos, habría de constituir un medio de reducir, en lo posible, la fricción y la desconfianza internacionales. En segundo lugar, por la jurisdicción consultiva de la Corte; que siempre habría de estar disponible para ofrecer a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad, o a otros órganos u organismos especializados de las Naciones Unidas autorizados por la Asamblea General, el asesoramiento sobre cualquier cuestión jurídica en forma de opinión consultiva. Se puede suponer razonablemente que se consideraba inconveniente el que entidades esencialmente políticas llegaran a tomar decisiones sin ayuda sobre cuestiones de índole jurídica.

Examinar solamente los varios fallos y opiniones consultivas de la Corte, como lo dijimos, en un esfuerzo por formular el balance del grado de éxito alcanzado por ella en la realización de los objetivos mencionados, durante los 25 años transcurridos desde 1945, seguramente daría un resultado que induciría inevitablemente a error. La razón de esto es que, aparte del hecho obvio de que la labor de la Corte no se puede someter provechosamente a un análisis cuantitativo, esto es, en función sólo del número de decisiones emitidas, la influencia de la Corte en el campo del arreglo pacífico de controversias no se confina a la determinación de las

controversias particulares que se le someten. La mera existencia de la Corte, especialmente en lo que atañe a los Estados que han afectado su jurisdicción obligatoria, ejerce un efecto pacífico. La posibilidad del arreglo judicial es susceptible de operar de manera que desaliente el llevar adelante reclamaciones que, cualesquiera que sean sus méritos individuales, pueden resultar muy difíciles, o imposibles de sustanciar ateniéndose al derecho internacional positivo. Por otra parte, cuando se lleva adelante una reclamación hasta llegar a la Corte, los principios jurídicos que se le pide que enuncie a fin de resolver tal reclamación, relacionados, por ejemplo, con la responsabilidad internacional (casos del Estrecho de Corfú y de la Barcelona Traction), o con el asilo político (Asilo, Haya de la Torre), o con el derecho de mar (caso de las pesquerías, Plataforma Continental del Mar del Norte), pueden tender, merced a la autoridad que se ha llegado a atribuir a los fallos de la Corte, y a pesar de la falta de toda doctrina estricta de los precedentes, según vimos, a desplazar de los reinos de la controversia, en el terreno internacional general, ciertas cuestiones que de otro modo pudieran haber seguido siendo causas de controversia y fricción. Las peticiones de opiniones consultivas también pueden ofrecer a la Corte la oportunidad de enunciar un principio general de derecho internacional.

3. La pregunta que quizá se pueda formular más útilmente es si el mecanismo de las Naciones Unidas, como parte integrante del cual fue concebida la Corte Internacional, ha estado funcionando en realidad en la forma en que se propusieron sus autores. Es decir, que existe la tendencia a achacar a la Corte Internacional de Justicia, lo que en última instancia sería una falla general de la concepción global del mecanismo de las instituciones internacionales de la sociedad de hoy. Si insistimos en una observación cuantitativa, veremos que el número de sentencias y de opiniones consultivas que se han pedido a la Corte Internacional que emita en poco más de 25 años, ha sido señaladamente menor que el número de las emitidas por la Corte Permanente durante la vida de este órgano, que de hecho cubrió un lapso de sólo 18 años. Debemos recordar al efecto que cuando estaba en preparación la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte si hubo algo fue una opinión mayoritaria en favor de un sistema de jurisdicción realmente obligatoria para la Corte. Sin embargo, dado que pareció que tal sistema no contaría con el apoyo completo, se decidió, a fin de llegar a un acuerdo, adoptar el sistema de la "cláusula opcional" contenida en el artículo 36 del Estatuto, que también había existido para la Corte Permanente, en virtud de la cual los Estados pueden depositar declaraciones en las que reconocen como obligatoria la jurisdicción de la Corte, en determinadas clases de litigios jurídicos.

Hubiera cabido esperar, en vista de la mayoría que apoyaba la jurisdicción obligatoria de la Corte, que la oportunidad que ofrecía el artícu-

lo 36 del Estatuto de proveer una medida considerable de jurisdicción obligatoria, hubiera sido aprovechada por la mayor parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Esta esperanza no fue defraudada durante los primeros años de la ONU. A fines de 1950, por ejemplo, las Naciones Unidas contaban con 60 Estados-miembros, de los cuales 34 habían registrado una declaración por la que aceptaban la jurisdicción obligatoria conforme al artículo 36. La tendencia en los últimos años, sin embargo, ha sido menos alentadora. Para 1960 el número de Estados-Miembros de las Naciones Unidas había aumentado a 99, pero sólo 37 Estados habían registrado declaraciones conforme al artículo 36. Diez años más tarde, en 1970, todavía las cifras correspondientes muestran un leve descenso adicional: de los 126 Estados-miembros en ese año, sólo 44 habían aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte. En otras palabras, a medida que la composición de las Naciones Unidas se ha ido haciendo más amplia, la idea del arreglo judicial obligatorio, de la que eran partidos tantos de los Estados reunidos en San Francisco en 1945, también ha encontrado mayor aceptación, pero en una proporción señaladamente menor. Claro es que el sistema del arreglo judicial obligatorio no fue creado como parte integrante del mecanismo de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas; pero es de temer que la vacilación generalizada en cuanto a aceptar este sistema quizás delate una cierta reserva con respecto al principio general del arreglo judicial de controversias que fue incorporado al sistema de las Naciones Unidas.

Otra tendencia desalentadora, cuya semilla fue sembrada en 1946, es la de depositar declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte, sujetas a reservas que, de hecho, permiten al Estado en cuestión elegir si la jurisdicción "obligatoria" será o no de hecho aceptada como tal. En más de una ocasión se han presentado ante la Corte reservas de esta índole y han sido tema de severas críticas. Esta actitud hacia la jurisdicción obligatoria, está hasta cierto punto relacionada con la cuestión de la importancia en este campo de la soberanía del Estado, con respecto a la cual hay por lo menos dos escuelas de pensamiento opuestas, en que se fundamenta la práctica de los gobiernos de varios Estados-Miembros.

4. Respecto a la facultad de solicitar opiniones consultivas, recordaremos que la función consultiva de la Corte Permanente de Justicia Internacional resultó ser en la práctica no menos importante que la Judicial, a pesar de que el tema de la jurisdicción consultiva, por novedoso y original, no permitió que se incluyeran provisiones sobre la misma en su Estatuto de 1922. Sin embargo, la Corte Permanente emitió en el curso de su existencia 27 opiniones consultivas, o sea un promedio de 3 cada dos años.

Cuando el Estatuto de la Corte actual fue elaborado después de la Segunda Guerra Mundial, se aprobaron las disposiciones relativas a la ju-

jurisdicción consultiva que se habían agregado al Estatuto de la Corte Permanente en 1929, y en la Carta de la ONU el derecho de solicitar una opinión fue conferido no solamente al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, siguiendo el precedente establecido por la Sociedad de las Naciones, sino también a cualesquiera otros órganos u organismos especializados de las Naciones Unidas, a los que en cualquier momento pudiera autorizar al efecto la Asamblea General. Se esperaba que la nueva Corte Internacional podría continuar el trabajo realizado por la Corte Permanente en ese campo.

Es imposible decir después de 25 años que esas esperanzas fueron satisfechas por entero. En el curso del mismo periodo, aproximadamente, se ha solicitado de la la Corte Internacional que emita trece opiniones consultivas, en contraste con las 27 de la Corte Permanente, a pesar de la ampliación de la clase de solicitantes de las opiniones que se acaban de mencionar. Ninguna de estas opiniones ha sido solicitada por el Consejo de Seguridad, y sólo dos lo han sido por organismos especializados. Si bien es posible descubrir una cierta reacción en el pensamiento de la posguerra a la confianza anterior, a veces exagerada, en la posibilidad de reducir todas las cuestiones a cuestiones jurídicas, no es posible hacer a un lado el trabajo consultivo de la Corte Permanente, considerándolo como el producto de una propensión excesiva a recurrir a la ley. Hoy en día, como en el periodo entre las dos guerras, existen multitud de problemas jurídicos menores, pero que importan en al vida de las organizaciones internacionales y sus miembros, y cuya solución por la Corte rendiría un servicio considerable.

5. Si nos atuviésemos a la conclusión a que incitan 25 años de experiencia de las realizaciones prácticas del principal órgano judicial de las Naciones Unidas, es decir, la Corte Internacional de Justicia, ésta tendría que ser tanto menos alentadora de lo que pudiera haberse esperado. Porque, como repetimos, la Organización de las Naciones Unidas, con sus órganos principales, fue concebida como un todo para que operara como un todo. Pero concentrándose en el mero trabajo de la Corte Internacional de Justicia, debemos decir que, independientemente de cualquier evaluación política, entendida en su más amplio sentido, del trabajo del órgano judicial principal de la ONU la contribución de la Corte Internacional de Justicia a través de su jurisprudencia a la Ciencia del Derecho Internacional es indiscutible y a todas luces orgullo para aquellos amantes del derecho internacional que han visto y sienten que, a pesar de todas las críticas que se le enderezan, es un proceso vivo en evolución constante. Éste es el verdadero sentido que quisimos dar al trabajo.

HÉCTOR CUADRA

Investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- BASTID, Suzanne. *La Jurisprudence de la Cour Internationale de Justice*, "Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye", 1958, t. 78, pp. 575-686.
- BASTID, Suzanne. *Les problèmes territoriaux dans la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice*, "Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye", 1962, t. 107 pp. 361-496.
- BERLIA, Georges. *Jurisprudence des tribunaux internationaux en ce qui concerne leur propre compétence*, "Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye", 1955, t. 88, pp. 112-180.
- CATUDAL, Honoré. *Procedures for accepting the optional clause of the statute of the International Court of Justice*. "American Journal of International Law", vol. 40, núm. 3, Washington, D. C., July, 1946.
- CHENG BIN. *General principles of law as applied by international courts and tribunals*. "The Library of World Affairs", núm. 21, London, 1953, 490 pp.
- CHRISTOR, Carl Q. *The jurisdiction of the International Court of Justice*. "Southern California Law Review", vol. 33, núm. 4, Los Angeles, 1960.
- DE VISSCHER, Charles. *Aspects récents du droit procédural de la Cour Internationale de Justice*, Pedone, Paris, 1966, 220 pp.
- DIMITRIJEVIC, VOJIN and RACIC. *The tendencies in accepting the Jurisdiction of the International Court of Justice*. "The New Yugoslav Law", Belgrade, January-September, 1961.
- DOEKER, Gunther. *International Politics and the International Court of Justice*. "Tulane Law Review", vol. xxxv, núm. 4, New Orleans, June, 1961.
- DUBISSON, M. *La Cour Internationale de Justice*, Paris, 1964, 471 pp.
- EISEMANN, COUSSIRAT-COUSTERE et HUR. *Petit manuel de la Cour Internationale de Justice*, Pedone, Paris, 1970, 311 pp.
- GORDON, Edward. *The World Court and the Interpretation of constitutive, Treaties*. "American Journal of International Law," vol. 59, núm. 4, Washington, D. C., October, 1965.
- GRIEVES, Forest L. *Reform of the method of rendering decisions in the International Court of Justice*. "American Journal of International Law", vol. 64, núm. 1, Washington, D. C., January, 1970.
- GROSS, Leo. *The International Court of Justice: Considerations of requirements for enhancing its role in the International Legal order*. "American Journal of International Law", vol. 65, núm. 2, Washington, April, 1971, pp. 253-326.
- GROSS, Leo. *Some observations on the International Court of Justice*. "The American Journal of International Law", vol. 56, núm. 1, Washington, D. C., January, 1962.
- HAMBRO, Edward. *La jurisprudence de la Cour Internationale. Répertoire des arrêts, avis et ordonnances*, Leyde, Sijthoff, 1952, 1963.

- HAMBRO, Edward. *The authority the advisory opinions of the International Court of Justice*. "International and Comparative Law Quarterly", vol. 3, 1st. part, London, January, 1954.
- HAMBRO, Edward. *Quelques problèmes touchant a la Cour International de Justice*. "Revue Hellénique de Droit International", xv, Année, núms. 1-2, Athenes, janvier-juin, 1962.
- HEERDEN, H. J. O. *Practice and procedures in the International Court of Justice*. "Codicillus". Special Edition, October, 1966, Pretoria, South Africa.
- HOGG, James. *The International Court; rules of treaty interpretation*. "Minnesota Law Review", vol. 43, núm. 3, January, 1959; vol. 44, núm. 1, November, 1959. Minneapolis, Minn. USA.
- KEITH, K. J. *The extent of the advisory jurisdiction of the International Court of Justice*, Leyde, Sijthoff, 1971, 271 pp.
- KNAPP, Blaise. *Quelques considérations sur la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice en matière de nationalité*. "Annuaire suisse de Droit International", vol. xvii, Zurich, 1960.
- LAUTERPACHT, Sir Hersch. *The development of international law by the International Court*, London, Stevens, 1958, 408 pp.
- LOUIS, Jean-Victor. L' "estoppel" devant la Cour International de Justice. "Revue de Droit International et de droit Comparé", xlii année, núms. 3-4, Bruxelles, 1965.
- MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. *Mutación de los jueces y continuidad jurisprudencial en el Tribunal Internacional de Justicia*. "Revista española de Derecho Internacional", vol. 15, núm. 1-2, 1162. Madrid, España.
- ROSENNE, Shabtai. *The International Court of Justice, an essay in political and legal theory*, 2nd. ed., 1961, 592 pp. *The law and practice of the International Court*, Leyde, Sijthoff, 1965. *The World Court, what it is and how it works*, Leyde, Sijthoff, 1962.
- ROSENNE, Shabtai. *The Court and the Judicial Process; cooperation and conflict* "International Organization", vol. xix, núm. 3, 1965, Boston, Mass.
- SCHWELB, Egon. *The process of amending the statute of the International Court of Justice*. "American Journal of International Law", vol. 64, núm. 5, Washington, October, 1970, pp. 880-892.
- SYATAUW, J. J. G. *Decisions of the International Court of Justice, a digest*, 2nd. ed., Leyde, Sijthoff, 1966, 280 pp.
- WRIGHT, Quincy. *The International Court of Justice and interpretation of multilateral treaties*. "American Journal of International Law", vol. 41, núm. 2, Washington, D. C., April, 1947.
- Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la C. I. J., annuel et bilingue*, 23 vol. parus.
- Mémoires, plaidoiries et documents*, 78 vol. parus.-Publications de la C. I. J. *Yearbook of the International Court of Justice*, off. doc. 25 volumes.